RECOMENDACIÓN: 9/2004

EXPEDIENTE:

EXP. CDHDF/122/04/CUAJ/D2202.000

PETICIONARIOS:

JOSÉ LAURO GODÍNEZ GONZÁLEZ

AGRAVIADOS:

**JOSÉ LAURO GODÍNEZ GONZÁLEZ Y
OTROS COLONOS DE LOMAS DEL CHAMIZAL.**

AUTORIDAD RESPONSABLE:

- 1) JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL**
- 2) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL**

CASO:

NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN, Y PRESTACIÓN INEFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO.

DERECHOS HUMANOS VIOLADOS:

DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO.

**C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ,
JEFE DELEGACIONAL
DEL DISTRITO FEDERAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS.**

**DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.**

PRESENTE.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de noviembre de dos mil cuatro. Visto el estado que guarda el expediente de queja citado al rubro y toda vez que se ha concluido la investigación de los hechos motivo de la misma y se acreditó la violación a derechos humanos, la Segunda Visitaduría formuló el proyecto de Recomendación, el cual fue previamente aprobado por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en términos de lo establecido por los artículos 3, 17 fracciones I, II, y IV, 24 fracción IV, 46, 47 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 136, 137 y 138 de su Reglamento Interno.

La presente Recomendación se dirige al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos y a la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, en tanto titulares

de las citadas dependencias, en términos de lo dispuesto en los artículos 15 fracción IV y 39 fracciones LXI, LXII, LXIII, LXIV y LXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 6 de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

En observancia a lo previsto por el artículo 139 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se procede a la descripción de los rubros que a continuación se enumeran:

1. Descripción de los hechos violatorios de los derechos humanos.

1.1. El 13 de mayo de 2004, esta Comisión recibió queja de **José Lauro Godínez González**, Representante de la *Asociación de Colonos Lomas del Chamizal en Cuajimalpa, A.C.*, a la que se asignó el expediente citado al rubro. En ella refirió que:

El 5 de abril de 2004, ingresaron un escrito dirigido al Director General Jurídico y de Gobierno en la Delegación Cuajimalpa, respecto de una denuncia por la invasión en la zona de reserva ecológica ubicada en la Barranca La Diferencia 4ª Sección, y a la fecha no han recibido respuesta alguna.

1.2. Consta en acta circunstanciada que el 17 de mayo de 2004, el peticionario José Lauro Godínez González manifestó a una visitadora adjunta de esta Comisión que:

En fecha 16 de abril de 2004 ingresó un escrito a la Jefatura Delegacional con motivo de los mismos hechos manifestados (El 5 de abril de 2004).

Aclara que el escrito de 5 de abril de 2004 fue un recordatorio, **ya que ha pasado más de un año desde su primera solicitud**, y a pesar de que ha establecido comunicación con diversas autoridades, todas le han indicado que están realizando las diligencias pertinentes para darle contestación, pero a pesar del tiempo pasado (un año), no se ha solucionado nada aunado a que sigue aumentando el número de personas invasoras de la barranca debido a que se están construyendo tres torres o edificios para su habitación.

2. Enumeración de las pruebas que integran el expediente y demuestran la violación a los derechos humanos.

2.1. El 17 de mayo de 2004, personal de este Organismo estableció contacto con la Secretaria Particular del Jefe Delegacional, a quien se le comunicaron los hechos motivo de la queja. Ésta indicó que, una vez recibidas las solicitudes se turnan a las áreas que conocen de la materia, que se requiere de una inspección ocular y posteriormente se realiza un reporte en el cual consten las firmas de los vecinos. La Secretaria Particular se comprometió a dar contestación por escrito a más tardar el 18 de mayo de 2004.

2.2. El mismo 17 de mayo del año en curso, mediante oficio número 9726, se solicitó al Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, un informe en relación con los hechos de la queja.

2.3. En respuesta, mediante oficio JSP/DGJG/DJ/SCCAL/0407/04, el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos manifestó, en lo sustancial que:

a) Se recibió la solicitud de fecha 5 de abril de 2004, a la cual se le dio contestación mediante oficio número DGRNyAP/336/2004 de la Dirección General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la demarcación de fecha 23 de abril de 2004 y notificándose al interesado las acciones que se están llevando a cabo y el procedimiento del trámite a seguir el 17 de mayo del año en curso;

b) Mediante oficio número DGJG/1732/04 de fecha 6 de abril de 2004, el Director General Jurídico y de Gobierno, Lic. Miguel Ángel Peláez Gerardo, informó de los hechos y solicitó que se destine una radio patrulla para que realice un monitoreo permanente a fin de evitar la invasión en áreas verdes, a la Coordinadora de Seguridad Pública Prof. Clementina Facundo Reyes, quien mediante oficio número CGSP/337/2004, de fecha 15 de abril de 2004, solicitó al 1er Insp. Jaime Mauro Rodríguez Acevedo que brinde el apoyo necesario en la zona de la barranca La Diferencia, y mediante oficio número CGSP/456/2004 de fecha 11 de mayo de 2004, la Coordinadora de Seguridad Pública contestó al Director General Jurídico y de Gobierno cuales unidades del sector CUJ-2 están brindando el apoyo solicitado y rinden informe a fin de evitar en lo posible los hechos manifestados.

2.3.1. Cabe resaltar que, a su respuesta adjuntó copia certificada del oficio DGJG/1732/04, suscrito por el licenciado Miguel Ángel Peláez Gerardo, Director General Jurídico y de Gobierno en Cuajimalpa de Morelos, del que se destaca que comunicó a la Coordinadora de Seguridad Pública que recibió escrito de José Lauro Godínez González, mediante el cual manifestó que tiene conocimiento de que invadirán la zona de reserva ecológica, ubicada en la barranca de La Diferencia..., **y que existe antecedente de que estas personas en semana santa del año pasado (2003) invadieron dicha zona, acto que realizaron el 16 de abril del año pasado, y hasta la fecha no se han podido retirar del lugar invadido**, por lo anterior, solicitó que se destinara una radio patrulla para que realizara un monitoreo permanente a fin de evitar la invasión en áreas verdes a partir del 6 de abril del año en curso (2004).

2.4. A fin de obtener mayores elementos para la debida documentación del expediente de queja, el 18 de junio de 2004 esta Comisión solicitó informes pormenorizados: **a)** Al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos; **b)** Al Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; **c)** Al Director General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y, **d)** Al Director General de Regulación y Gestión Ambiental del Agua, Suelos y Residuos, ambos de la Secretaría del Medio Ambiente.

2.5. En respuesta, las mencionadas autoridades remitieron a esta Comisión:

2.5.1. El oficio número JSP/DGJG/DJ/520/04, suscrito por el Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos mediante el cual, en lo sustancial, manifestó:

Las 3 barrancas (*Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote*), se encuentran asentadas en una zonificación del uso del suelo AV (Área Verde), de conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, versión 1997, y como lo señala el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Estas áreas verdes son de alto valor ambiental, en las cuales no se permiten obras o construcciones de carácter habitacional, no es posible otorgar licencias de construcción y esta autoridad no las ha expedido. Por lo anterior, la existencia de construcciones o viviendas en dichas barrancas tienen un carácter irregular.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene facultades para imponer las áreas susceptibles a desarrollar. La Asamblea Legislativa es la facultada para acordar los cambios de uso de suelo. Independientemente del régimen de propiedad que exista en los terrenos de dichas barrancas, se aplica sin distinción la regulación urbana y ambiental.

Además de reuniones de coordinación, para acordar las acciones legales administrativas, se han efectuado recorridos de campo y monitoreo, para identificar y ubicar los procesos de ocupación irregular de las barrancas, y determinar su situación legal administrativa.

Internamente las áreas responsables de la Delegación de atender los casos que se comentan, han llevado un proceso formal administrativo, dando cuenta de los ilícitos en las barrancas, con el soporte documental necesario, además de los acuerdos de atención conjunta con las áreas centrales del Gobierno del Distrito Federal.

Las barrancas de referencia tienen una restricción de rescate ecológico en cuanto a áreas verdes. Pero además de su zonificación en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, el plano 1283-3 A de octubre de 1986, autorizado por la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), que corresponde a la 4ª sección de la Colonia Lomas del Chamizal, y en donde se ubican las barrancas Milpa Vieja y La Diferencia, sus superficies tienen una inscripción de **Reserva Ecológica**.

Se ha tenido conocimiento de obras y construcciones ilegales en las barrancas, pero además, se han llevado a cabo procedimientos correspondientes de campo, la acumulación de pruebas documentales, así como visitas de verificación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene competencia con relación a los desmontes en superficies forestales fuera de la zona urbana, flora y fauna silvestre, así como en la contaminación del suelo y relleno de barrancas y

escurrimientos naturales, motivo por el cual se le invitó a participar en talleres de ilícitos ambientales, además de reuniones de coordinación y en recorridos de campo para detectar ilícitos de competencia federal, para que iniciara los procedimientos correspondientes.

De igual forma se procedió con la Comisión Nacional del Agua, por lo que corresponde a las concesiones, autorizaciones y licencias de uso de la zona federal y escurrimientos naturales.

Existe una estrecha coordinación con la Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental, Agua, Suelo y Residuos, para la atención conjunta de los ilícitos ambientales en la Delegación.

En la Delegación Cuajimalpa de Morelos, no existen Áreas Naturales Protegidas de competencia local. Existen 2 ANP de competencia federal, que son Parques Nacionales: Desierto de los Leones y el Insurgente Miguel Hidalgo, en ambos no existen asentamientos humanos irregulares.

Dentro del POA 2004, la Delegación Cuajimalpa de Morelos cuenta con tres proyectos prioritarios con recursos financieros, además de otros, como: limpieza de barrancas, prevención y combate de incendios forestales, reforestación, mantenimiento de las mismas, además de proyectos de desarrollo rural, que eviten la venta de las tierras de uso agropecuario y forestal, a un uso urbano, a través de la venta fraudulenta de la tierra del suelo de conservación.

Los recursos son insuficientes a nivel federal, local y delegacional.

Se cuenta también con el apoyo de las agencias del Ministerio Público, cuando se detiene *in fraganti* al infractor, cometiendo delitos ambientales.

2.5.1.1. El Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, adjuntó a su informe, entre otros documentos:

a) Copia simple del dictamen técnico ambiental, suscrito por la bióloga Erika Sámano Quiroz y el ingeniero Jaime Jiménez González, en el cual, respecto de las construcciones y actos de invasión a la barranca La Diferencia, emitieron lo siguiente:

DICTAMEN

Primero. De acuerdo con las tablas de usos de suelo urbano de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, el uso de suelo que se le está dando a la barranca conocida como LA DIFERENCIA, **no está permitido, ya que en este tipo de zonificación el único uso de suelo permitido es el establecimiento de garitas y casetas de vigilancia de uso exclusivo de servicios de policía.**

Segundo. Las afectaciones que se han generado en la barranca conocida como LA DIFERENCIA por el establecimiento de 21 viviendas son las siguientes:

- Remoción de los estratos herbáceos y arbustivos.
- Contaminación del cauce por la descarga de aguas negras a cielo abierto y por desechos sólidos (basura).
- Introducción de fauna doméstica (perros) que genera el desplazamiento de la fauna nativa.
- Compactación del suelo.
- Remoción del suelo.

Tercero. Los impactos ambientales que se producirán en la zona por la alteración de sufre la barranca son:

- Inhibe la infiltración adecuada del agua, evitando la recarga de los mantos freáticos.
- Disminución de la capacidad de captura de CO², lo que implica un cambio climático (alteraciones en los regímenes de lluvia y temperatura).
- Alteración del ciclo hidrológico.
- Escasez de agua potable.
- Degradación del paisaje.
- Pérdida del suelo por erosión hídrica.
- Contaminación de Cuerpos de agua.
- Cambio de uso del suelo.

CONCLUSIONES

Primero. Tomando en cuenta las observaciones realizadas y con la finalidad de prevenir y mitigar los efectos ambientales negativos descritos anteriormente, se concluye que no debe permitirse el establecimiento de las viviendas en mención, dado que provoca **un cambio en el uso del suelo**, ya que la vocación de éste, como ya se mencionó en el considerando IV, no es apta para la construcción de viviendas.

Segundo. Para **mitigar** los efectos ambientales negativos que se generan con el establecimiento de dichas viviendas, se recomienda que sean removidos los materiales usados en la construcción de las mismas y un programa de reforestación con las especies existentes en la zona (*Buddleia cordata* (tepozán) *Quercus spp* (encino), *Cupressus Lusitanica* (cedro blanco) *Fraxinus uhdei* (fresno), *Agnus spp.* (aile)). Los individuos utilizados para la reforestación deben tener una altura mayor o igual a 1 metro.

Tercero. Costos del desmantelamiento de las 21 viviendas, así como retiro del material usado en dichas construcciones dentro de la barranca conocida como LA DIFERENCIA:

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Demolición manual De elementos Estructurales de Concreto simple o Mampostería común	m ³	186	\$218	\$40,548
Acarreo y Transportación del Material usado en La construcción de Las viviendas	m ³	186	\$93.75	\$17,437.5
TOTAL				\$57,985.5

Cuarto. Costos de reforestación del área afectada por la instalación de 21 viviendas dentro de la barranca conocida como LA DIFERENCIA:

Especie	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<i>Buddleia cordata</i> (tepozán)	Planta	66	\$6	\$396
<i>Quercus spp</i> (encino)	Planta	77	\$32	\$2,454
<i>Agnus spp</i> (aile)	Planta	77	\$8	\$616
TOTAL				\$3,476

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Transporte de las plantas	Viaje	1	\$500	\$500
Carga y descarga de la planta	Jornal	5	\$175	\$875
Trazo de la plantación	Jornal	5	\$175	\$875
Capeo y plantación	Jornal	10	\$175	\$1,750
Cajeteo y deshierbe	Jornal	10	\$175	\$1,750
Riego*	Pipa agua de	90	\$400	\$36,000
Tinacos	Pieza	2	\$6000	\$12,000
Mantenimientos de las plantas*	m ³	5	\$175	\$105,000
Adquisición de composta	Viaje	100	\$1000	\$100,000
Transporte de	Jornal	17	\$500	\$8,500

composta				
Descarga de composta	Jornal	20	\$175	\$3,500
Aplicación y extendido de composta	Jornal	15	\$175	\$2,625
TOTAL				\$273,375

***El costo total es calculado por seis meses, tiempo mínimo que requieren las plantas para su desarrollo y adaptación al medio.**

Por lo anterior el costo total por la restauración del área afectada por la construcción de 21 viviendas es de: **\$334,836.5 (Trescientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 50/100 M.N.).**

b) Copia simple del oficio DDU/899/04, suscrito por el Director de Desarrollo Urbano de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual informó al Director General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas la existencia de **23 construcciones** desarrolladas en la ladera poniente de la barranca La Diferencia, **1 construcción** en la ladera oriente de la misma barranca y **3 construcciones** en la ladera oriente de la barranca Milpa Vieja, las cuales están fuera de la notificación para la colonia Lomas del Chamizal; dichas obras están asentadas dentro de una zonificación de uso de suelo AV (área verde), que por sus características constituyen elementos de valor al medio ambiente que se deben de rescatar o conservar, y de acuerdo a la consulta del archivo de licencias de construcción, **se obtiene que no existe autorización alguna para el desarrollo de las 27 obras que señala en su escrito, aunado a que 26 de éstas, se encuentran en una zona marcada como reserva ecológica.**

c) Copia simple del oficio DGJG/2267/2004, suscrito por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual solicitó al Director de Desarrollo Urbano de esa demarcación territorial, que determinara la zonificación del inmueble ubicado en avenida Stim 1313, segunda sección, colonia Lomas del Chamizal, ya que **se detectó una construcción terminada y habitada que no cuenta con la documentación que ampare su legal ejecución.**

2.5.2. El oficio número PAOT/SPOT/827/2004, de 28 de junio de 2004, suscrito por el Suprocurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, licenciado Miguel Ángel Cancino, en el cual informó que:

El 16 de abril de 2003, el C. José Lauro Godínez González vía telefónica interpuso ante esta Suprocuraduría, la denuncia correspondiente por invasiones en la 4ª Sección de la Barranca conocida como "La Diferencia".

En fecha 28 de abril de 2003, se presentó un escrito ratificado el mismo día por el Arq. Ernesto Amtmman, por daños ecológicos y ambientales a la “Barranca del Ocote”, razón por la cual la Suprocuraduría promovió varias reuniones en virtud de que se incumplió el programa delegacional de desarrollo urbano vigente en Cuajimalpa de Morelos, las cuales se han llevado a cabo en las instalaciones de la Delegación Cuajimalpa.

En razón de lo anterior, **en reiteradas ocasiones se solicitó la intervención de las autoridades delegacionales con el propósito de que en el ámbito de sus facultades, iniciaran los procedimientos de verificación administrativa por incumplimiento al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Cuajimalpa de Morelos, así como la construcción de vivienda precaria sobre la barranca conocida como “El ocote” o “La Diferencia”**

Ante la falta de respuesta de las autoridades delegacionales esa Procuraduría promovió diversas reuniones para dar celeridad a la atención del asunto. En ese sentido y a petición de esa Procuraduría se han celebrado diversas reuniones en las instalaciones de la Delegación Cuajimalpa para atender la problemática que se presenta en la citada barranca, a las que han acudido la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (a solicitud de la Delegación), la Comisión Nacional del Agua, la Dirección General de Recursos naturales y Desarrollo Rural Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial (PAOTDF), y de la Dirección General de Bosques Urbanos.

Adicionalmente y a **petición de esa Procuraduría** se han realizado reuniones con la Dirección General de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Comisión de Barrancas y Cauces para dar solución total a la problemática, para ello **esa Suprocuraduría elaboró un dictamen técnico relativo a la afectación producida en la “Barranca La Diferencia”**, enviado, entre otros, al Jefe Delegacional de Cuajimalpa en fecha 17 de junio de 2004, con el propósito de que **inicie el procedimiento de verificación administrativa que corresponda.**

El citado dictamen también será enviado al Ministerio Público con la denuncia penal correspondiente, en ejercicio de las atribuciones de esa PAOT.

En fecha 25 de abril de 2003, esta Suprocuraduría tuvo conocimiento del derribo de árboles y de relleno de material sólido para la construcción de un camino sobre la barranca conocida como “El Zapote”, por lo que **se inició una actuación de oficio** solicitando la intervención de diversas autoridades, entre ellas, la Delegación Cuajimalpa de Morelos, SEDUVI, CNA, PROFEPA, logrando detener el relleno de la barranca y **a la fecha no se realizan obras en el lugar.**

El 10 de junio de 2003 durante un recorrido en esa Delegación, se observó el relleno de la barranca conocida como “El Ocote” o “La Diferencia”, **por lo que se inició una actuación de oficio**, y se solicitó la actuación de las autoridades que tienen facultades para ello, en este caso, la Dirección General Jurídica y de

Gobierno, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano ambas de Cuajimalpa, la Dirección General de Regulación y Gestión del Agua, Suelo y Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente.

Por lo que hace a la autoridad competente para evaluar la afectación ambiental en barrancas, esto depende de las especificidades de la irregularidad, ya sea por derribo de árboles, cambio de uso de suelo, construcción ilegal, obras sin impacto ambiental, etc., pueden intervenir distintas autoridades del Distrito Federal.

Por lo que hace a las facultades de la Procuraduría para la protección y preservación en el suelo de conservación y barrancas, así como a las acciones realizadas en el caso de la Barranca "La Diferencia", a esta Procuraduría le corresponden, entre otras cuestiones:

- Atender denuncias ciudadanas, sin ejercer actos de autoridad en los hechos, esta Procuraduría actúa como un Ombudsman ambiental y en desarrollo urbano
- Presentar denuncia ante las autoridades competentes cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y penal, así como en materia ambiental y del ordenamiento territorial;
- Emitir recomendaciones ante las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial;
- Emitir sugerencias a la Asamblea Legislativa y a las autoridades judiciales para ser consideradas en los procedimientos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia relacionados a la protección del ambiente y el ordenamiento territorial;
- Formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto de daños y en su caso de la reparación de los mismos, en materia ambiental y del ordenamiento territorial.
- Además de las denuncias y actuaciones de oficio, se analiza técnica y jurídicamente la problemática general de afectación al suelo de conservación y barrancas por asentamientos irregulares en las barrancas de Cuajimalpa y otras Delegaciones.

A partir de las denuncias y actuaciones de oficio, se analiza técnica y jurídicamente la problemática general de afectación al suelo de conservación y barrancas por asentamientos irregulares, por lo cual esa Subprocuraduría se encuentra realizando un estudio respecto de la barranca conocida como La Diferencia

El fundamento para considerar a las barrancas de Cuajimalpa como suelo de conservación, específicamente la Barranca "La Diferencia", en base al Programa Delegacional Urbano vigente en Cuajimalpa de Morelos, corresponde al suelo urbano, con zonificación AV (Área Verde).

Desde el punto de vista de esta Suprocuraduría, no se actualiza algún supuesto para que pudiera intervenir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, toda vez que la Barranca "La Diferencia" se ubica en suelo urbano del Distrito Federal.

Respecto de la existencia de un registro sobre la pérdida del suelo de conservación, no se tiene conocimiento sobre el particular; sin embargo esa Procuraduría, desde su creación, ha planteado la necesidad de contar con un inventario de asentamientos irregulares, de acciones de rescate y monitoreo.

En cuanto a las actividades ilícitas que se presentan en suelo de conservación y en áreas naturales protegidas, a través de las denuncias ciudadanas presentadas ante esa institución y de las actuaciones iniciadas de oficio, se ha tenido conocimiento de diversos casos al respecto.

Además se tienen diversas reuniones con la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, en las cuales se ha tratado el tema de las Barrancas de Cuajimalpa, acordando que las autoridades delegacionales implementen las acciones previstas en la legislación.

Los problemas para proteger el suelo de conservación son **la falta de una correcta aplicación de la normatividad en materia ambiental y del ordenamiento territorial, por parte de las autoridades competentes para realizar acciones de verificación, así como para la aplicación de medidas de seguridad y sanciones administrativas.**

Se conoce la existencia de una partida especial para la protección y preservación del suelo de conservación; sin embargo, no se cuenta con más información.

2.5.3. El oficio SMA/DGCORENADER/432/2004, de fecha 24 de junio de 2004.

a) Las barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote, están clasificadas de conformidad con el PDDU vigente desde el 31 de julio de 1997 como áreas Verdes de Valor Ambiental, Bosques, Barrancas y Zonas Verdes.

b) Son zonas que por sus características constituyen elementos de valor del medio ambiente que se deben rescatar o conservar como barrancas, ríos, arroyos, chinampas, zonas arboladas, etc. Los predios de propiedad del Departamento del Distrito Federal (sic) que no se encuentren catalogados como reservas seguirán manteniendo el mismo uso de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano.

c) Sobre si esta DGCORENADER ha recibido alguna denuncia por actos de invasión en el sistema de barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote, le

informo que efectivamente la Asociación de Colonos de Lomas del Chamizal ha realizado denuncias sobre invasiones, asimismo envió una solicitud para decretar el área como protegida.

d) La competencia y facultades de esta DGCORENADER, se encuentran establecidas en el artículo 56 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que este Organismo ha recibido denuncias de la Asociación de Colonos de Lomas del Chamizal y del Arq. Amtmann, las cuales han sido atendidas por la SMA.

Cabe mencionar que la autoridad competente en este caso es la Delegación de Cuajimalpa de Morelos, sin embargo hasta el momento no ha actuado para sancionar a los infractores, por lo tanto el asunto se esta tratando en la Dirección General de Gobierno a solicitud de la DGCORENADER.

En lo relativo al decreto de área protegida se inició un expediente técnico, el cual fue transferido en el 2003 a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental para su continuación y posterior declaratoria. De acuerdo al Programa General de Ordenamiento Ecológico las barrancas son suelo de conservación, en virtud de lo cual y con fundamento en el artículo 56 del RIAPDF, el personal del Centro Regional No.1 realiza la vigilancia de dicha zona, ya que DGCORENADER no puede aplicar sanciones, sino sólo verificar.

e) En cuanto a las acciones que realizaría la DGCORENADER en el ámbito de su competencia es emitir los lineamientos para realizar la restauración de dicha área, los trabajos de restauración deben llevarse a cabo en coordinación con la DGRNANP de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos y con la DGBUEA de la Secretaría del Medio Ambiente.

f) No se tiene conocimiento de que la autoridad delegacional haya implementado acciones para preservar o restaurar el equilibrio ecológico en las barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote.

g) No se tiene conocimiento sobre si esta autoridad ha intervenido en la formulación, ejecución, modificación o cancelación de planes de programas de desarrollo urbano en el sistema de barrancas.

h) La forma en que opera el sistema de inspección y vigilancia de los recursos naturales en el suelo de conservación y áreas naturales protegidas se encuentra previsto en el Título Séptimo, Capítulo II de la Inspección y Vigilancia de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

i) Por lo que respecta a que si esta DGCORENADER tenía conocimiento de la problemática que dio origen a esta queja, no se tiene conocimiento de que la autoridad delegacional haya realizado alguna acción para preservar o restaurar el equilibrio ecológico de la barranca, además de que no tenemos competencia en el suelo urbano.

j) En el supuesto de que esta autoridad fuera competente para conocer de este asunto, el procedimiento a seguir sería el establecido en los artículos 201 al 219 de la Ley Ambiental para el Distrito Federal.

k) La DGCORENADER, en conjunto con la Delegación y otras autoridades, integran mesas de trabajo a efecto de plantear la forma en la que se llevara a cabo la recuperación administrativa del o de los predios como el que nos ocupa, tomando en consideración la información de la SEDUVI o de recomendaciones o de dictámenes de la PAOT, que en este caso ya se emitió.

l) La autoridad a la que le correspondería implementar las acciones legales correspondientes sobre las posibles afectaciones ambientales al sistema de barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote, es la Delegación de Cuajimalpa de Morelos en virtud de que es ella la autoridad que lleva a cabo su administración, manejo y vigilancia, y por consecuencia es quien debe formular y aplicar la Legislación Ambiental del Distrito Federal.

m) En caso de que esta autoridad fuera competente y con fundamento en el artículo 56 Ter fracciones I a VIII, IX, X y XII a XXIX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 201 al 219 de la Ley Ambiental para el Distrito Federal, la DGCORENADER, tanto en materia ambiental como administrativa, estaría en facultad de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

n) Las acciones concretas que en su caso se generarían a cargo de esta autoridad serían para preservar y restaurar el equilibrio ecológico en relación con las obras realizadas en el predio materia de la queja, consistiría: en emitir un dictamen de impacto ambiental en el que se manifiesten las características y usos del suelo, así como la afectación que éste sufriría el suelo, proporcionando los lineamientos, criterios y opiniones para la restauración de las áreas afectadas de barrancas y colaborar con la delegación para llevar a cabo las acciones de reforestación de la zona.

o) Las autoridades que en su caso podrían ser competentes para efectuar acciones específicas ante el presente asunto, debido a la naturaleza del predio sobre el cual versa la problemática serían las siguientes:

1. Comisión Nacional de Aguas Nacionales;
2. Jefe de Gobierno;
3. Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
4. Delegación Política; y
5. Secretaría del Medio Ambiente:

- Dirección General de Regulación y Vigilancia Ambiental (Antes Dirección General de Gestión Ambiental de Agua, Suelo y Residuos)
- Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental

p) Las consecuencias ambientales de la afectación a las barrancas del Distrito Federal radicarían principalmente en la disminución cuantitativa y cualitativa de servicios ambientales proporcionados por cada barranca según sus características particulares.

2.5.4. El oficio SMA/DGRVA/DIR/ 8402/2004 suscrito por el Director General de Regulación y Gestión Ambiental Ing. Guillermo Calderón Aguilera, en el que manifestó lo siguiente:

Actualmente se están tramitando diversos procedimientos ante esta Dirección General de los cuales sólo uno colinda con la barranca denominada La Diferencia.

En fecha 17 de febrero de 2004 mediante el oficio número SG/1732/2004 se informó a la Secretaria del Medio Ambiente Dra. Claudia Sheinbaum Pardo que en la sesión del 11 de febrero del año en curso el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó seis puntos y con relación al asunto que nos ocupa, el acuerdo segundo a continuación se transcribe:

“SEGUNDO: Solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, investiguen en qué términos se otorgaron las autorizaciones para construir los grandes edificios que hoy en día se levantan sobre las barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote, en la colonia Lomas del Chamizal, Delegación Cuajimalpa de Morelos”.

Durante el mes de junio del año en curso esta Dirección General realizó las últimas acciones que resultaron procedentes en cada procedimiento administrativo instaurado, mismas que a continuación se indican:

El 4 de octubre de 1994, la entonces Dirección de Ecología del Departamento del Distrito Federal, mediante resolución administrativa número D34/DGE/4.0.0/18279, autorizó en materia de impacto ambiental a la empresa denominada VPN PROMOCION INMOBILIARIA, S.C., la construcción y operación del Conjunto Residencial “BOSQUES”, en el predio ubicado en Avenida Secretaría de Marina número 539, Colonia Lomas del Chamizal, Cuarta Sección, Delegación Cuajimalpa de Morelos, el cual consistía en dos torres de 37 niveles cada una, con un total de 266 departamentos. No obstante lo anterior dicha autorización ya no está vigente en virtud de no haber iniciado las obras de construcción dentro del plazo de un año establecido en dicha resolución.

Con fecha 14 de abril de 2004, la empresa GRUPO PROMOTOR DE INVERSIONES MÉXICO, S.A. DE C.V., solicitó la autorización en materia de impacto ambiental para el proyecto denominado “CONJUNTO RESIDENCIAL DOS TORRES BOSQUES”, ubicado en la dirección antes citada y con

características similares al proyecto autorizado en 1994, solicitud que se integró bajo el expediente número DIR-ME-449/2004, realizándose las siguientes acciones:

Con fecha 17 de mayo de 2004, mediante el oficio número SMA/DGRGAASR/DIR/5415/2004, se emitió el acuerdo de integración del expediente DIR-ME-449/2004.

Con fecha 23 de junio del año en curso, mediante oficio número SMA/DGRVA/7511/7511/2004, se expide la orden de visita domiciliaria ordinaria número DIR-DO-045/2004 al predio ubicado en Avenida Secretaría de Marina número 539, Colonia Lomas del Chamizal, Cuarta Sección, Delegación Cuajimalpa de Morelos, entre cuyo objeto y alcance se identificó el de materializar lo ordenado en la resolución administrativa número SMA/DGRVA/DIR/7194/2004 de fecha 16 de junio de 2004 "CLAUSURANDO DE MANERA TEMPORAL TOTAL" las obras y actividades del proyecto denominado "BOSQUES", promovida por la empresa GRUPO PROMOTOR DE INVERSIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. en el domicilio antes señalado.

Con fecha 23 de junio de 2004, mediante oficio número SMA/DGRVA/DIR/7510/2004 se comisionó al personal autorizado por esta Dirección para participar en la visita antes señalada.

Con la misma fecha se practicó la visita antes señalada, levantándose el Acta Administrativa número 824/2004, colocándose los sellos de clausura.

Con fecha 24 de junio del presente año, se emitió el oficio número SMA/DGRVA/DIR/7632/2004, dirigido al C. Ignacio Ruíz López, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, al cual se le solicitó la opinión técnica con relación a la solicitud de impacto en materia de Impacto Ambiental respecto del proyecto denominado "CONJUNTO RESIDENCIAL DOS TORRES BOSQUES" presentado por la empresa GRUPO PROMOTOR DE INVERSIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Con fecha 24 de junio de 2004 año se solicitó al Director General de Desarrollo Urbano y Vivienda Arq. Guillermo Ysusi Farfán, si la resolución de modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa de Morelos versión 1987 y la licencia de uso de suelo número 445/94 y folio 1090/94 antes citado siguen vigentes y si el uso de suelo y las superficies permitidas en ellos son aplicables actualmente. En espera de respuesta.

En relación a la barranca *La Diferencia* se señala lo siguiente:

Con fecha 20 de abril de 2001, la hoy Dirección General de Regulación y Vigilancia Ambiental en el expediente 17969/2001, emitió la resolución administrativa número SMA/DGRGAASR/DIAR/20478/2001 mediante la cual autorizó en materia de impacto ambiental en favor del C. MOISÉS COHEN ABADI

Y COPROPIETARIOS, la construcción y operación del proyecto denominado "RESIDENCIAL REFORMA LAURELES", el cual consiste en una construcción de 4 torres con planta baja y 22 niveles de departamentos, en un terreno formado por cuatro predios que totalizarán 11,023 metros cuadrados, ubicados en la Calle Prolongación Paseo de los Laureles número 423, y en Av. Prolongación Bosques de la Reforma con los números 1539, 1547 y 1551 todos en la Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa colindantes con la Barranca denominada La Diferencia.

Por otra parte y con motivo de la solicitud del C. Jaime Schlitter Alba, otrora Director General de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de practicar una visita en el edificio ubicado al oriente de la Secretaria de Marina a la entrada de la 4ª Sección, N° 1539, de la Av. Prolongación Bosques de Reforma, en la colonia Lomas del Chamizal, al principio de la barranca "La Diferencia", en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, localizado entre las coordenadas geográficas 19° 22' 59" Latitud Norte y 99° 15' 59" Longitud Este, se integró el expediente número DIR/D/354/2002.

Con fecha 2 de octubre de 2002 la entonces Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental del Agua, Suelo y Residuos, emitió la orden de visita de verificación extraordinaria mediante el oficio número SMA/DGRGAASR/DIR/17342/2002 para los efectos antes citados, en esta misma fecha se emitió el oficio número SMA/DGRGAASR/DIR/17343/2002, mediante el cual se comisionó a los verificadores administrativos autorizados, para practicar la visita de verificación extraordinaria número DIR-VED-113/2002.

Con fecha 3 de octubre de 2002, el personal comisionado practicó la visita DIR-VED-113/2002 levantándose el Acta Administrativa número 2954.

Con fecha 18 de junio del presente año, esta Dirección General emitió la Resolución Administrativa número SMA/DGRVA/DIR/7254/2004, mediante la cual se resolvió la Visita de Verificación Extraordinaria número DIR-VED-113/2002, misma que fue notificada con fecha 29 de junio del año en curso, en la citada resolución se impuso a C. MOISÉS COHEN ABADI responsable del proyecto denominado "RESIDENCIAL REFORMA LAURELES", una multa de QUINIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, a razón de \$45.24 (cuarenta y cinco pesos 24/100 M.N.) que se traducen en la cantidad de \$22,620.00 (Veintidós mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.), por no haber presentado el Dictamen Favorable de Impacto Urbano y no haber presentado los informes trimestrales cuarto y sexto de avance de obra.

Con fecha 29 de enero de 2002, la hoy Dirección General de Regulación y Vigilancia Ambiental emitió el oficio número SMA/DGRGAASR/DIR/037/2002, en el expediente número 24334/2001, mediante el cual se informó al C. MOISÉS FARCA AMIGA, que el proyecto consistente en la construcción y operación de un desarrollo habitacional de 36 viviendas, en el predio ubicado en Av. STIM número 120, colonia Lomas del Chamizal, Delegación Cuajimalpa de Morelos, con

superficie aproximada de 3,028 metros cuadrados, estaba sujeto a la obtención de la autorización en materia de Impacto Ambiental, Modalidad General. Este oficio fue notificado el 19 de febrero de 2002 y hasta la fecha el C. MOISÉS FARCA AMIGA, no ha ingresado ninguna solicitud a esta Dirección General.

2.6. El 1 de septiembre de 2004, esta Comisión realizó una solicitud de informe complementario al Director General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Ing. Nicolás Mendoza Jiménez.

2.7. El 1 de octubre de 2004, se recibió la respuesta, en la que entre otras cosas nos informó que:

“...el avance de los asentamientos irregulares depende de diferentes factores, tal como es el deterioro de las áreas centrales, las fallas del mercado inmobiliario que encarecen el suelo, así como las presiones de usos más rentables que el de vivienda, por lo que muchos pobres tienen que marchar en busca de suelo más barato, en este sentido el crecimiento de los asentamientos no obedece a ninguna fórmula” y “Las principales causas por las que se ha generado el cambio de uso de suelo de conservación, obedece a que durante las últimas décadas los pobladores de bajos ingresos han tenido pocas oportunidades de acceder al mercado formal y al financiamiento público para su vivienda, por lo que recurre a la venta, apropiación, y/o construcción irregular del suelo, asimismo y como se mencionó la renta y venta de estos terrenos va por debajo de las ventas de zonas urbanas, desconocimiento de la ley y de las limitantes con las que cuenta su terreno al ubicarse en suelo de conservación.”

3. Descripción de la situación jurídica generada por la violación a los derechos humanos y del contexto en el que los hechos se presentaron.

3.1. En **abril de 2003**, el C. José Lauro Godínez Gómez, Representante de la Asociación de Colonos de Lomas del Chamizal en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, denunció por escrito a las autoridades de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, la invasión a la zona de reserva ecológica ubicada en la barranca de La Diferencia, en esa demarcación territorial.

3.2. Ante la falta de actuación y respuesta de las autoridades de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, nuevamente en **abril de 2004** denunció la invasión de la barranca La Diferencia.

3.3. En atención a dicha denuncia, y a pesar de que la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos manifestó que **existe antecedente de que estas personas en semana santa del año pasado (2003) invadieron dicha zona, acto que realizaron el 16 de abril del año pasado, y hasta la fecha no se han podido retirar del lugar invadido**, únicamente solicitó a la Coordinadora de Seguridad Pública de esa demarcación territorial, que se destinara una radio patrulla para que realizara un monitoreo permanente a fin de **evitar la invasión** en áreas verdes.

3.4. Según dictamen técnico-ambiental, emitido por peritos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, las afectaciones que se han generado en la barranca conocida como LA DIFERENCIA por el establecimiento de viviendas son las siguientes: **a)** Contaminación del cauce por la descarga de aguas negras a cielo abierto y por desechos sólidos (basura); **b)** Remoción de los estratos herbáceos y arbustivos; **c)** Introducción de fauna doméstica (perros) que genera el desplazamiento de la fauna nativa; **d)** Compactación del suelo, y **e)** Remoción del suelo.

3.5. El mismo dictamen establece que los impactos ambientales que se producirán en la zona por la alteración que sufre la barranca son: **a)** Inhibe la infiltración adecuada del agua, evitando la recarga de los mantos freáticos; **b)** Disminución de la capacidad de captura de CO², lo que implica un cambio climático (alteraciones en los regímenes de lluvia y temperatura); **c)** Alteración del ciclo hidrológico; **d)** Escasez de agua potable; **e)** Degradación del paisaje, **e)** Pérdida del suelo por erosión hídrica, **f)** Contaminación de cuerpos de agua y **g)** Cambio de uso del suelo.

3.6. Debido a las afectaciones y al impacto ambiental ocasionado, el costo total por la restauración del área afectada por la construcción de las viviendas en la barranca La Diferencia es de: **\$334,836.50 (Trescientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 50/100 M.N.).**

3.7. Según lo señalado a esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por el Suprocurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y por el Director General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, **existe una falta de respuesta de** las autoridades de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos **ya que hasta el momento no han actuado para sancionar a los infractores.**

3.8. Por otra parte, en la Dirección General de Regulación y Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, se están tramitando diversos procedimientos relacionados con obras ilegales e ilícitas en la Colonia Lomas del Chamizal, de los cuales uno colinda con la barranca La Diferencia.

3.9. Dichos procedimientos también obedecen a que, en sesión de 11 de febrero de 2004, el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dictó el siguiente acuerdo:

“SEGUNDO: Solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, investiguen en qué términos se otorgaron las autorizaciones para construir los grandes edificios que hoy en día se levantarán sobre las barrancas Milpa Vieja, La Diferencia y El Zapote, en la colonia Lomas del Chamizal, delegación Cuajimalpa de Morelos”.

3.10. Es así como las pruebas obtenidas y valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, son concluyentes y

producen convicción a esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para tener por acreditada la violación a los derechos humanos a la protección judicial y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, elementos probatorios que serán debidamente desarrollados y valorados en el siguiente capítulo

4. La motivación y fundamentación en la que se soporta la Recomendación:

4.1. Marco histórico y doctrinal de referencia

4.1.1. Medio ambiente

4.1.1.1. El medio ambiente es el conjunto de todos los elementos vivos y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo del ser humano y demás organismos vivos. De éstos se obtiene agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que son utilizadas diariamente.

4.1.1.2. El abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, tiene como consecuencia que se encuentren en peligro de extinción o su agotamiento mismo. El aire y el agua están contaminándose, los bosques están desapareciendo, debido a los incendios y a la explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca¹.

4.1.2. Génesis del derecho al medio ambiente

4.1.2.1. La idea de la necesidad del mantenimiento de la armonía entre el hombre y la naturaleza se remonta a las épocas más primitivas de la historia de la humanidad y se manifiesta asimismo en todas las religiones, desde ese tiempo a la actualidad.²

4.1.2.2. Por su parte, Hipócrates, padre de la medicina moderna (460-375 AC), cuyo mérito fundamental fue el de desarrollar un sistema racional basado en la observación y la experiencia, para el estudio de las enfermedades cuyas causas atribuía a fenómenos naturales y no a intervenciones de los dioses o a fenómenos de tipo mágico-religioso³, destacó en su obra *Aires, Aguas y Lugares*, la importancia del medio ambiente como causa de enfermedad.

4.1.2.3. Pero es a partir de la Revolución Industrial cuando se generan grandes alteraciones y degradaciones de naturaleza ambiental, debido a los impactos por extracción de recursos naturales, energía, etc. Las afectaciones al medio ambiente hacen crisis a mediados del siglo XX, cuando se inicia una severa crítica a los modelos económicos de crecimiento lineal basados en la capacidad de carga a la naturaleza, y es así como surge en el plano científico la teoría de los límites del crecimiento, donde se habló de la finitud de los recursos de nuestro planeta y por

ende, su incapacidad para responder a la presión progresiva e ilimitada de la población humana.

4.1.2.4. Este proceso de sensibilización y concienciación global tiene su clímax en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Conferencia de Estocolmo 1972). El resultado de esta conferencia es la Declaración de Estocolmo, que en el primer párrafo del principio uno establece:

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.

4.1.2.5. Es así como el derecho al ambiente que consagró en el ámbito internacional la Declaración de Estocolmo, da a luz a una nueva noción de equidad: la equidad intergeneracional, esto es, la posibilidad de que las futuras generaciones tengan acceso a iguales oportunidades que las presentes, tendientes a lograr una calidad de vida digna.

4.1.3. Fundamento

4.1.3.1. El fundamento último del derecho al medio ambiente sano, no es otro sino la dignidad de la persona humana. El fundamento inmediato del derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado consiste en la necesidad de preservar éste en condiciones que aseguren la supervivencia de la especie humana, y en consecuencia, como instrumento asegurador de la realización de los demás derechos humanos.

4.1.4. Vinculación con otros derechos

4.1.4.1. El derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contiene e integra otros derechos; se puede considerar como su característica especial, el integrar los derechos de una persona en una dimensión vital, esto es que no solamente sirve para su desarrollo biológico, sino que además integra la relación de la persona con su entorno.

4.1.4.2. Muy en particular, se puede señalar que el derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado está estrechamente relacionado con:

- a) El derecho a la vida⁴;
- b) Derecho a la salud⁵;
- c) Derecho a la vivienda adecuada⁶ ;
- d) El derecho a la información⁷;

e) Derecho de las minorías étnicas al derecho a la autodeterminación⁸;

f) Derecho al desarrollo⁹, y

g) Derecho a la paz¹⁰.

4.1.4.3. Es así que, vista la importancia del derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, resulta una imperiosa necesidad la intervención del Estado, no únicamente para reconocer el derecho, sino para crear y ejecutar políticas públicas reales, serias, consistentes y eficaces para su tutela.

4.1.5. Derecho Comparado

4.1.5.1. Muchos Estados han reconocido expresamente el derecho humano al medio ambiente sano, otros no lo hacen en forma expresa pero lo vinculan a través de otro derecho; ejemplo de esto es la Constitución Italiana de 1948, que si bien no contiene artículo alguno que exprese el derecho humano al medio ambiente adecuado, éste ha sido reconocido a través de jurisprudencia, al relacionarlo con los artículos 9, 32 y 41, los cuales se refieren a la protección del patrimonio histórico y artístico de la nación, a la protección de la salud y a la iniciativa económica dentro de un marco que no se contradiga con su utilidad social ni perjudique la seguridad, la libertad y la dignidad humana.¹¹

4.1.5.2. En el Derecho Alemán, la Ley Fundamental de Bonn, tampoco contemplaba este derecho, pero en la reforma de 27 de octubre de 1994, se inserta el artículo 20, en el que se establece dentro del marco constitucional la responsabilidad del Estado con las generaciones futuras, para lo cual deberá proteger las condiciones naturales e indispensables para la vida.

4.1.5.3. La Constitución Griega de 1975 ha señalado que la protección del medio ambiente natural y cultural constituye una obligación del Estado, el cual deberá de tomar medidas especiales, preventivas o represivas con el fin de su conservación.

4.1.5.4. Destaca la Constitución de Portugal de 1976, ya que establece el deber del Estado de proteger los derechos fundamentales; pero más aún, establece como requisito para la protección de la herencia cultural de los portugueses, la defensa de la naturaleza y el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, aunque el reconocimiento expreso a un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado se encuentra establecido en el apartado de los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales. Del mismo modo, la Constitución establece el derecho de las personas físicas y jurídicas a recibir compensaciones por los daños causados al medio ambiente, cuando éste les afecte directamente.

4.1.5.5. Es relevante mencionar la reforma al artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica del año 1994, para que se incluyera el derecho fundamental a un

ambiente sano y equilibrado, lo cual fue un importante paso en el reconocimiento de lo ecológico en el desarrollo constitucional de los derechos de las personas en ese país; sin embargo, a juicio del profesor Alfredo Chirino¹², este primer paso fue muy limitado y destaca el proyecto de reforma constitucional del presidente Abel Pacheco, mediante la cual se hace un reconocimiento amplio del derecho humano a un ambiente físico, biológico, cultural, económico, social y humano ecológicamente sostenible; esto es, el reconocimiento de los diversos factores que están profundamente interrelacionados en los conflictos ambientales. No sólo se trata de las interacciones entre las especies y los ecosistemas, sino también de las cuestiones culturales y físicas que tienen un papel trascendental en la comprensión de los problemas relacionados con la conservación del ambiente y en generar prácticas para un desarrollo ambiental sostenible, que satisfaga las necesidades de hoy, sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

4.1.5.6. Por último, se destaca la experiencia legislativa de Colombia, ya que la propia Constitución de ese país toma nota en forma muy particular el tema medioambiental, estableciéndose lo siguiente:

CAPÍTULO 3

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

Art. 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber de Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Art. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas.

Art. 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.

El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

Art. 82. Es deber de Estado velar por la protección de la integridad de espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

4.2. Obligaciones del Estado Mexicano en Materia Ambiental.

4.2.1. El derecho al medio ambiente se caracteriza por trascender la esfera privada y grupal de la titularidad del derecho; son derechos que pertenecen, a un mismo tiempo y en el mismo *quantum*, a toda la colectividad, de ahí que también se les denomine derechos de pertenencia o incidencia colectiva.

4.2.2. Es así que, en el derecho al ambiente, cada persona es titular de una cuota parte del derecho, de forma simultánea e incluyente al derecho de los demás miembros de la sociedad. Esta cuota parte se constituye en la faz subjetiva del derecho, la cual legitima a la persona para tutelarlos (defenderlos) en caso de que el mismo fuere amenazado o vulnerado. Se trata de una coparticipación colectiva de intereses, que excede los tradicionales criterios de los derechos individuales basados en una relación de exclusividad respecto al bien jurídico protegido.

4.2.3. Como derecho fundamental del ser humano, el derecho a un medio ambiente sano y saludable para los habitantes, se encuentra contemplado en diversos ordenamientos jurídicos de derecho interno y ha sido más ampliamente tratado en el ámbito internacional a través de múltiples instrumentos. Éstos forman el marco jurídico necesario para la regulación de la materia medioambiental, tales instrumentos son:

4.2.3.1. Norma interna

4.2.3.1.1. En relación al derecho al medio ambiente sano y equilibrio ecológico, la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, establece:

Artículo 4.

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

4.2.3.1.2. Aunque el concepto de medio ambiente está estrechamente relacionado a un aspecto de protección en materia económica, también es importante señalar lo que establece el artículo 25 de la Constitución Política de los Estado Unidos

Mexicanos, específicamente en el sexto párrafo, en el sentido de que: *Bajo criterios de equidad social y productividad se impulsará al sector industrial, tanto en las empresas privadas como sociales sujetándose a las modalidades del interés público y al uso de los recursos productivos cuidando su conservación y el medio ambiente.*

4.2.3.1.3. Por su parte, el artículo 27 de nuestra Carta Magna, tercer párrafo, décimo cuarto renglón, establece: *...Preservar y restaurar el equilibrio ecológico.* Este precepto establece la preservación del medio ambiente, pero no como un derecho de los mexicanos, sino como una atribución u obligación del Estado de conservar el equilibrio ecológico.

4.2.3.1.4. El último de los Artículos Constitucionales que menciona la obligación del Estado a proteger el ambiente, es el Artículo 73, Fracción XXIX-G que dice: El Congreso tiene facultad: *"Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico".*

4.2.3.1.5. Por su parte, la **Ley General de Salud** señala:

Artículo 3.

En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

Fracción XIII.

La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre.

4.2.3.1.6. Sobre el tema, la **Ley General de Desarrollo Social** establece:

Artículo 3

La política de desarrollo social se sujetara a los siguientes principios:

- I. Libertad: capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal así como para participar en el desarrollo social;
- II. Justicia distributiva: garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus meritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas;
- III. Solidaridad: colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

IV. Integralidad: articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la política nacional de desarrollo social;

V. Participación social: derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;

VI. Sustentabilidad: preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

...

4.2.3.1.7. Respecto de las facultades de las autoridades del Distrito Federal en materia ambiental, el **Estatuto de Gobierno del Distrito Federal** establece:

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden público e interés general y son norma fundamental de organización y funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 12. La Organización Política y Administrativa del Distrito Federal atenderá los siguientes principios estratégicos:

X. La conjugación de acciones de desarrollo con políticas y normas de seguridad y de protección a los elementos del medio ambiente;

Artículo 67. Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal son las siguientes:

XVI. Formular el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;

XXVI. Dirigir la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano del Distrito Federal, en los términos de las leyes;

XXVII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación, en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, con el objeto que asuma las siguientes funciones:

a) El manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal;

...

Artículo 69. El Distrito Federal participará, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto, en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, Estados y Municipios en las zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, en materias de **asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico;** transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública.

Artículo 118. Para el desarrollo y bienestar social en la Ciudad deberán tomarse en cuenta las siguientes materias:

...

II. Planeación del desarrollo;

III. Reservas territoriales, uso de suelo y vivienda;

IV. Preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico;

Tratándose de las materias a que se refiere este artículo, las leyes de la Asamblea Legislativa establecerán los sistemas de dirección, coordinación, y en su caso de desconcentración o descentralización, que permitan aproximar la actuación de la administración pública a los habitantes de la ciudad.

4.2.3.1.8. La **Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal**, refiere:

Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias:

...

IV. Secretaría del Medio Ambiente;

4.2.3.1.9. El conjunto de normas jurídicas que en lo particular regulan el tema del medio ambiente las encontramos en La **Ley Ambiental del Distrito Federal**, la cual entre otras cosas prevé:

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:

- I. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los instrumentos y procedimientos para su aplicación;
- II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la administración pública del Distrito Federal en materia de conservación del medio ambiente, protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico;
- III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la conservación de los ecosistemas;
- IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, así como manejar y vigilar aquellas cuya administración se asuma por convenio con la federación, estados o municipios;

- V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal en aquellos casos que no sean competencia de la federación;
- VI. Establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones administrativas que correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven;
- VII. Regular la responsabilidad por daños al ambiente y establecer los mecanismos adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales en los procesos productivos; y
- VIII. Establecer el ámbito de participación de la sociedad en el desarrollo y la gestión ambiental.

Artículo 2. Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos:

...

III. En la conservación y control de la contaminación del **suelo**;

...

V. En la protección y preservación de la flora y fauna en las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas y en el suelo de conservación competencia del Distrito Federal.

VI. En la política de desarrollo sustentable y los instrumentos para su aplicación.

VII. En el establecimiento de las competencias de las autoridades ambientales.

VIII. En la prevención, control y acciones contra la contaminación ambiental.

IX. En la prestación de servicios ambientales; y

X. En el establecimiento de **medidas de control, seguridad y sanciones**.

Artículo 3. Se consideran de utilidad pública:

...

II. El establecimiento, **protección, preservación, restauración y mejoramiento** de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y en general del **suelo de conservación**, para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales;

III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de producción en zona federal de las barrancas, humedales, vasos de presas, cuerpos y corrientes de aguas;

IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y suelo, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos naturales y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e incremento de la flora y fauna silvestres;

VII. La participación social encaminada al desarrollo sustentable del Distrito Federal;

VIII. La elaboración y aplicación de planes y programas que contengan políticas de desarrollo integral de la entidad bajo criterios ambientales.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes:

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Los espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido suficientemente alterados por actividades antropogénicas, o que quieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son áreas que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible su preservación.

ÁREA VERDE: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice en el Distrito Federal.

BARRANCAS: Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico.

CONSERVACIÓN: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de detección, rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se mantengan las condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y de los ecosistemas propios del Distrito Federal.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: La regulación ambiental obligatoria respecto de los *usos del suelo fuera del suelo urbano*, del manejo de los recursos naturales y la realización de actividades para *el suelo de conservación* y barrancas integradas a los programas de desarrollo urbano.

PARQUES: Las áreas verdes o espacios abiertos jardinados de uso público, ubicados dentro del suelo urbano o dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los centros de población *y poblados rurales en suelo de conservación*, que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en que se localizan, y que ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes.

SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

SUELO URBANO: La clasificación establecida en la fracción I del artículo 30 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, incluidas las áreas verdes dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales localizados en suelo de conservación que establece el programa general de ordenamiento ecológico.

SUELO DE CONSERVACIÓN: La clasificación establecida en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Artículo 6. Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal:

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

II. El Titular de la **Secretaría del Medio Ambiente;**

III. Los **Jefes Delegacionales del Distrito Federal;** y

IV. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III, en cada órgano político administrativo existirá una unidad administrativa encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que esta Ley le señalan como de su competencia. **La administración pública local será la encargada de formular la política de desarrollo sustentable para el Distrito Federal así como de realizar las acciones necesarias para proteger y restaurar el ambiente y los elementos naturales en forma coordinada, concertada y corresponsable con la sociedad en general, así como con las dependencias federales competentes.**

...

Artículo 18. Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la

Administración Pública Local, así como, los particulares, observarán los principios y lineamientos siguientes:
...

VI. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que cause, de conformidad con las reglas que establece esta Ley.

4.2.3.1.10. Por su parte, el **Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal**, establece:

Artículo 31.

Quedan prohibidos la urbanización, los asentamientos humanos o el depósito de basura o residuos en las barrancas, cauces de ríos y arroyos sujetos a la protección, preservación o restauración ecológica en los términos de la Ley.

Para los efectos de este artículo se entiende por barranca la hendedura formada en el terreno por el flujo natural del agua o por las condiciones topográficas o geológicas, cuya profundidad es mayor a cinco metros y a dos veces su anchura y su longitud es superior a cuarenta metros.

4.2.3.1.11. Por último, la **Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal**, señala:

Artículo 30.

El territorio del Distrito Federal se clasificará e el Programa General en:
...

III. Suelo de conservación: comprende el que lo amerite por su ubicación, extensión, vulnerabilidad y calidad, el que tenga impacto en el medio ambiente y en el ordenamiento territorial; los promontorios, los cerros, las zonas de recarga natural del acuífero, las colinas, elevaciones y depresiones orográficas que constituyan elementos naturales del territorio de la ciudad y aquel cuyo subsuelo se haya visto afectado por los fenómenos naturales o por explotaciones o aprovechamientos de cualquier género, que representen peligros permanentes o accidentales para el establecimiento de los asentamientos humanos.

4.2.3.2. Norma Internacional

4.2.3.2.1. En el ámbito internacional diferentes naciones se dan cita, a fin de analizar la problemática del medio ambiente y sus repercusiones inmediatas y futuras, en búsqueda de encontrar soluciones generales y particulares.

4.2.3.2.2. Entre las reuniones internacionales referidas destacan: La **Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente**, cuyo resultado fue la **Declaración de la**

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo.¹³ Los principios que contiene este instrumento se refieren, entre otros, al derecho del hombre a disfrutar de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad, que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar con la correlativa obligación de proteger y mejorar el medio para generaciones presentes y futuras; de igual forma, se marca la importancia de la planificación del desarrollo económico tomando en cuenta la conservación de la naturaleza. En esta reunión la comunidad internacional reconoció diferentes conceptos como el de *ecosistema*, se consideró la importancia de la relación existente entre ecología y medio ambiente sociedad y desarrollo.

4.2.3.2.3. Por su parte, la **Primera Cumbre entre los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea**, con la participación del Presidente de la Comisión Europea, se realizó en la ciudad de **Río de Janeiro, Brasil**, los días 28 y 29 de junio de 1999. Esta convención busca un acercamiento al desarrollo sostenible a través de objetivos claves, como son: la conservación de la biodiversidad biológica, el uso sustentable de sus componentes, a la par considera el intensificar esfuerzos para atender las necesidades de las generaciones presentes y futuras, mediante la adopción y el cumplimiento de estrategias de desarrollo sostenible, haciendo compatibles el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el progreso social.

4.2.3.2.4. La **Carta Mundial de la Naturaleza** de 28 de octubre de 1982, en la que se establece el respeto a la naturaleza y a sus procesos esenciales, prevé la protección a las especies y sus hábitats a fin de que éstas no desaparezcan; contempla la administración de recursos tanto terrestres, marinos como atmosféricos, con la finalidad de mantener su óptima productividad sin que se ponga en peligro la integridad de los ecosistemas o especies con los que coexistan.

4.2.3.2.5. La Convención Marco sobre el Cambio Climático, de 1992, cuyo objetivo principal fue lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.¹⁴

4.2.3.2.6. Además de las anteriores, a la fecha se han llevado a cabo diversas convenciones sobre temas diversos en materia ambiental, que al igual que las que se han nombrado, pretenden encontrar la senda que conduzca al equilibrio entre la satisfacción de las necesidades del ser humano y la sustentabilidad de los recursos naturales, aportando cada nación propuestas basadas en su propia experiencia científica y social, entre ellas se pueden citar las siguientes:

4.2.3.2.7. La **Convención de Ramsar** de 1971, (sobre las zonas húmedas de importancia internacional como los hábitats de las aves acuáticas); **Convención de la UNESCO**, de 1972 (primera convención que sitúa el Patrimonio Mundial, cultural y natural, bajo la protección de la Comunidad Internacional); **la Convención de Washington**, de 1973 (sobre el comercio internacional de especies de fauna y de flora salvajes amenazadas por la extinción); **Convención de Ginebra**, del año 1979 (sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza de Larga Distancia); **Convención de Viena** de 1985, (sobre la protección de la capa de ozono); **el Informe Brundtland**, también conocido como Nuestro Futuro Común, de la Comisión Mundial para el Desarrollo del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, de 1987 (en el que se trata el concepto de desarrollo sustentable); la **Declaración de La Haya**, de 1989 (sobre el recalentamiento planetario), la **Convención de Basilea**, de 1989 (sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y sobre su eliminación); **Convención de Helsinki**, de 1992 (acerca de los efectos trasfronterizos de los accidentes industriales mayores y sobre la protección y la utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales); **Convención de París**, de 1992 (sobre la protección del medio marino del Atlántico del Noreste).

4.2.3.2.8. Como resultado de estas convenciones, los Estados asumen compromisos, como son el respetar las disposiciones de los propios instrumentos Internacionales, ya sea insertando o creando en su sistema normativo los mecanismos necesarios que garanticen el respeto a los derechos y obligaciones que hubiesen sido determinadas y contraídas por las partes.

4.2.3.2.9. Tardíamente comenzó el proceso de protección a los recursos naturales, no obstante, aún existe la oportunidad de conservar las especies y ecosistemas que habitan el planeta, por lo que, con base en la normatividad mencionada, los Estados inexcusablemente tienen la obligación y compromiso de respetar, cuidar, proteger y preservar el medio ambiente y los recursos que lo integran, por ser sinónimo de vida, desarrollo, salud y bienestar para la humanidad.

4.2.3.3. Del análisis de la normatividad mencionada, esta Comisión de Derechos Humanos destaca que corresponde al Estado, en el caso particular, a las autoridades del Distrito Federal por conducto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la o el titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y las y los Jefes Delegacionales realizar, entre otras acciones, la definición de los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los instrumentos y procedimientos para su aplicación; regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la administración pública del Distrito Federal en materia de conservación del medio ambiente, protección, conservación y restauración del equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la conservación de los ecosistemas.

4.2.3.4. Ahora bien, del estudio y valoración de las pruebas recabadas y que obran en el expediente de queja, se desprende que servidores públicos de la Jefatura Delegacional del Distrito Federal en Cuajimalpa de Morelos y de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, han violado en agravio de José Lauro Godínez González y otros colonos de Lomas del Chamizal, los siguientes derechos humanos:

4.3. Por parte de las autoridades de la Jefatura Delegacional del Distrito Federal en Cuajimalpa de Morelos:

4.3.1. Violación al derecho a la protección judicial (recurso efectivo).

4.3.1.1. El Estado tiene la obligación de vigilar que todos los individuos en igualdad de circunstancias —sindistinción de ninguna especie— tengan acceso a los recursos legales que las leyes contemplan y que estos recursos sean efectivos a fin de que las personas puedan hacer valer sus derechos. Cualquier omisión del Estado que impida a los individuos interponer los recursos legales procedentes se traduce en una violación a sus derechos humanos.

4.3.1.2. Ahora bien, por la trascendencia e importancia del tema medioambiental, resulta preminente que los recursos que están contemplados en la ley, tengan un seguimiento real, eficaz, sencillo y rápido por parte de las autoridades, pero sobre todo efectivo, ya que la garantía de este recurso constituye un pilar básico de una sociedad democrática.

4.3.1.3. Respecto a la justiciabilidad del derecho ambiental, un recurso judicial adecuado debe ser idóneo para proteger al medio ambiente frente acciones abusivas. Un recurso judicial efectivo en materia ambiental, si aplicamos el criterio de la Corte, debe reunir por lo menos las siguientes características¹⁵:

- Debe ser **rápido y sencillo**, para evitar que se torne ilusorio deberá **fundamentarse en el principio de prevención** en la medida de lo posible las decisiones deben tomarse anticipando y evitando los daños ambientales “...en el ámbito de la protección del medio ambiente, la vigilancia y la prevención se imponen en razón del carácter a menudo irreparable de los daños causados al medio ambiente y de los límites inherentes al propio mecanismo de reparación de este tipo de daños”¹⁶.
- Deberá asimismo contemplar una **legitimación activa amplia**, esto es no sólo la víctima directa de la degradación ambiental sino también todo aquel ciudadano que desee ejercitar su rol de protector del medio ambiente.
- Deberá sin duda tener en cuenta **el costo para iniciar el recurso**, este deberá ser **razonable y accesible al ciudadano común** y prever la posibilidad de acceder en determinados casos sin costo alguno. ¹⁷
- Deberá fundamentarse en el principio precautorio “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. ¹⁸

- Deberá reconocer la **importancia de acceder a la información** científica la misma deberá ponerse a disposición de las partes y del Tribunal. En caso de no existir, el Estado deberá proveer las medidas para su producción.

4.3.1.4. El derecho a un recurso efectivo lo encontramos establecido en los siguientes ordenamientos jurídicos:

4.3.1.5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo

17.

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

4.3.1.6. Es importante destacar que existen instrumentos jurídicos internacionales que consagran la obligación del Estado de proteger y garantizar a toda persona el pleno y absoluto respeto de sus derechos humanos, instrumentos jurídicos que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son Ley Suprema. Dicho numeral establece:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

4.3.1.7. Lo anterior también se ratifica con la tesis Núm LXXVII/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha interpretado la prelación jerárquica de la Ley Suprema, ubicando a los tratados internacionales por encima de las leyes federales.

4.3.1.8. También se menciona el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**¹⁹.

Artículo 2.

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

4.3.1.9. La Convención Americana sobre Derechos Humanos²⁰ “Pacto de San José de Costa Rica”

Artículo 25. Protección Judicial.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

4.3.1.10. Sobre lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la obligación de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, y más aún que esa garantía no sólo se aplica respecto de los derechos protegidos por la Convención Americana, sino también para la

protección de todos aquellos que estén reconocidos en la Constitución o en cualquier otra ley, es así como el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorpora el principio reconocido en el Derecho Internacional de los derechos humanos, *de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos*, en este sentido la Corte ha precisado:

...los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (Art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (Art. 8.1.), todo ello, dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz. Excepciones Preliminares, sentencias de 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente.)

Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A, No. 9, párrs. 23-24.

4.3.1.11. En el mismo sentido, se destaca lo establecido por la Corte I.D.H., también ha declarado que *el artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1. de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes...21*, es así como se concluye que una sociedad democrática deberá observar dos principios básicos como lo es, por una parte, el respetar los derechos y libertades reconocidos en las normas internas, así como en las internacionales con que se tenga vinculación y adopción, así como a garantizar el libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, y por la otra, en estrecha relación con lo anterior, se deberá garantizar que la autoridad competente facultada por la ley, decida oportuna y eficazmente sobre los derechos que las personas pongan en su conocimiento, con argumentos técnico-jurídicos que generen certeza jurídica para las partes y que se cumpla en todos sus términos la determinación a la que llegue la autoridad.

4.3.1.12. Ahora bien, esta Comisión considera que servidores públicos adscritos a la Jefatura Delegacional del Distrito Federal en Cuajimalpa de Morelos, violaron en agravio de José Lauro Godínez González y otros, su derecho a la protección judicial, es decir, al recurso efectivo en virtud de lo que a continuación se expone:

4.3.2. Respeto de la existencia de un recurso efectivo

4.3.2.1. Como ha quedado acreditado en el expediente de queja, el peticionario José Lauro Godínez González denunció por escrito una invasión en la zona de la reserva ecológica ubicada en la Barranca de La Diferencia, cuarta sección. Dicha invasión ocurrió en abril de 2003 y desde ese entonces, el peticionario lo hizo del conocimiento de la autoridad delegacional en Cuajimalpa de Morelos; ante la falta

de respuesta, un año después, es decir en abril de 2004, nuevamente solicitó la intervención de dichas autoridades.

4.3.2.2. Con motivo del planteamiento del peticionario, las autoridades de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos comunicaron a la Coordinadora de Seguridad Pública que ***existe antecedente de que estas personas en semana santa del año pasado (2003) invadieron dicha zona, acto que realizaron el 16 de abril del año pasado, y hasta la fecha no se han podido retirar del lugar invadido***, por lo anterior, solicitaron que se destinara una radio patrulla para que realizara un monitoreo permanente a fin de evitar la invasión en áreas verdes a partir del 6 de abril del año en curso (2004).

4.3.2.3. A pesar de que la propia autoridad delegacional tenía conocimiento de que, en términos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (1997) las barrancas denominadas La Diferencia, Milpa Vieja y El Zapote, están clasificadas con zonificación "AV" (áreas verdes) y éstas áreas verdes son de alto valor ambiental, en las cuales no se permiten obras o construcciones de carácter habitacional, no es posible otorgar licencias de construcción, por lo que la existencia de construcciones o viviendas en dichas barrancas tienen un carácter irregular, y únicamente sería la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la facultada para acordar los cambios de uso de suelo, su actuación se centró a solicitar el apoyo de una radio patrulla para realizar un monitoreo.

4.3.2.4. Ahora bien, en el informe rendido a esta Comisión por el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, se desprende que han tenido conocimiento de obras y construcciones ilegales en las barrancas, y se han llevado a cabo procedimientos correspondientes de campo, la acumulación de pruebas documentales, así como visitas de verificación; sin embargo, estos aún están en proceso de resolución.

4.3.2.5. Cuando menos, en base al dictamen técnico ambiental, emitido por peritos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, los daños medioambientales ocasionados por tan sólo 27 construcciones ilegales en la barranca de La Diferencia, han sido cuantificados en \$334,836.50 (Trescientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 50/100 M.N.). Situación que fue hecha del conocimiento de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos el 17 de junio de 2004, a fin de iniciar el procedimiento de verificación administrativa correspondiente.

4.3.2.6. Este Organismo se lamenta por la limitada actuación de las autoridades en Cuajimalpa de Morelos, ya que por la naturaleza del área que integra el sistema de barrancas, entre las que se encuentra La Diferencia, no es posible la construcción de obra alguna. La actuación de dichas autoridades ha sido omisa en cuanto a las obligaciones que textualmente establece el artículo 39 fracciones LXI, LXII y LXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública²², ya que de conformidad con el artículo 6, fracción III, de la Ley Ambiental del Distrito Federal,

la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos es considerada como autoridad en materia ambiental.

4.3.2.7. Lo anterior genera convicción en esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de que, si bien es cierto los servidores públicos de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, han tenido conocimiento de obras ilegales dentro del sistema de barrancas de esa demarcación territorial, primordialmente en La Diferencia; a pesar de que se ha dado inicio a diversos procedimientos administrativos, éstos adolecen de la efectividad que caracteriza una adecuada protección judicial, situación que ha sido ampliamente explorada en el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de que no es suficiente el establecimiento de un recurso legal, sino que *para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad.*²³ En el presente caso se afirma que se dejó en estado de indefensión a los agraviados en la violación de sus derechos humanos, en virtud de que la vía de protección fue limitada y el resultado de dicho recurso sólo se ha constreñido al ámbito administrativo, dejando a un lado la investigación y el resultado en el aspecto que, sin duda es el más importante, la afectación al medio ambiente que prevalece

4.3.3. Respeto de la idoneidad del recurso

4.3.3.1. Para normar el criterio del presente pronunciamiento, respecto de la idoneidad del recurso, se cuenta con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua, en el sentido de que:

...la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.²⁴

4.3.3.2. En efecto, el recurso invocado por el peticionario y seguido por las autoridades de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos no fue idóneo, ya que respecto de la facultad de verificación que le conceden diversos ordenamientos jurídicos como la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su reglamento; los Programas de Desarrollo Urbano (delegacional y parcial en su caso), el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, la ley Ambiental del Distrito Federal y su reglamento, respecto a la poda, derribo y transplante de árboles, así como a las diversas disposiciones en materia de Ordenamiento Ecológico del Territorio, conforme al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Ambiental del Distrito Federal, en términos de los lineamientos que emita la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal²⁵, las autoridades de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos

han sido omisas en la investigación de los actos de invasión al sistema de barrancas, específicamente en La Diferencia; por ello, no ha sido posible la imposición de medidas de seguridad, y otras sanciones, o cuando menos, justificar ampliamente en forma fundada la improcedencia de estas acciones.

4.3.3.3. La argumentación de esta Comisión, misma que tiene sustento en las pruebas que fueron recabadas durante la investigación, analizadas bajo los principios de la lógica, la sana crítica, la experiencia y la legalidad, genera convicción de la violación al derecho humano a la protección judicial, ya que como se acredita en el presente documento, a pesar de que ha transcurrido **casí un año y medio** desde que la Delegación Cuajimalpa de Morelos tuvo conocimiento de las invasiones al sistema de barrancas, a la fecha, **no se ha instaurado un procedimiento eficaz que determine, en su caso medidas de reparación o compensación por los daños ocasionados respecto de los rubros de desarrollo urbano, construcciones y remoción, derribo o retiro de árboles.**

4.3.3.4. La conducta de los servidores públicos de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos contraviene las hipótesis previstas en las fracciones I y XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las cuales establecen que:

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto fijan en el servicio de las fuerzas armadas.

Fracción I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo cargo o comisión;

...

Fracción XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.

4.3.4. Es importante concluir este apartado con la reflexión de que realizar las acciones de preservación de medio ambiente, constituye uno de los principales compromisos de las autoridades y habitantes del Distrito Federal. Es un deber del Estado construir, bajo un esquema de participación ciudadana, una política pública coordinada y firme que asegure la efectividad de las acciones de combate a los daños al medio ambiente. La aplicación de estas políticas garantizará el ejercicio de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras que permitan elevar el nivel de vida en la Ciudad con una perspectiva ecológica.

4.4. Por parte de las autoridades de la Jefatura Delegacional del Distrito Federal en Cuajimalpa y de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal:

4.4.1. Violación al derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

4.4.1.1. Establecer el medio ambiente como un derecho humano, conlleva señalar en primer término, lo que por derechos humanos debe entenderse, así como el concepto del medio ambiente y la relevancia de este último, con la finalidad de entenderlo como un elemento sustancial a la naturaleza del individuo, sin el cual su dignidad, desarrollo en sociedad y la vida plena son inalcanzables, características fundamentales de los derechos humanos.

4.4.1.2. De esta forma, se tiene que los derechos humanos, están considerados como prerrogativas que tiene la persona frente al Estado para impedir que éste interfiera en el ejercicio de los derechos fundamentales del hombre, así como para que éste reconozca esos derechos inherentes y sean plasmados y protegidos mediante los instrumentos legales positivos necesarios.

4.4.1.3. Para Alberto del Castillo del Valle,²⁶ son el conjunto de privilegios y prerrogativas de las cuales goza cualquier ser humano, —*en virtud de ser el titular de ellos no tiene obligaciones derivadas de sus propios derechos, por el contrario al ser sujeto activo los hace valer ante el Estado y sus autoridades*—, por el hecho de serlo —*por ser inherentes e innatos al mismo, los adquiere desde su nacimiento y los pierde sólo a su muerte*—, relativas a su vida, libertad y seguridad, propiedad, dignidad e integridad corporal y moral, —*requisitos sine qua non para hablar válidamente de un ser humano*—, que deben ser reconocidos, protegidos, respetados y observados por el Estado y sus autoridades para la realización del individuo como persona, y sin los cuales se perdería la calidad humana.

4.4.1.4. De lo anterior, se desprende que estos derechos son **inherentes a todo ser humano**, por el sólo hecho de serlo, **no son una creación de las leyes**, pues éstas los reconocen y tutelan; más no los crean; **son imprescriptibles**, ya que su vigencia va más allá de la de las leyes, pues son derechos que son válidos en cualquier tiempo y espacio aún y cuando no se encuentren contemplados en los ordenamientos legales; son derechos **inalienables**, no pueden venderse o enajenarse ya que no son objetos de comercio; son **irrenunciables**, pues son inseparables a todo ser humano, es decir se nace y muere con ellos y no puede concebirse a una persona humana, propiamente como tal sin dichas prerrogativas.

4.4.1.5. Los derechos humanos, una vez reconocidos e implementados dentro del sistema jurídico del Estado, *indican su grado de desarrollo civilizatorio*, como indica el catedrático de origen Vasco, Demetrio Loperena, y es verdad, no puede pensarse en un Estado libre, democrático y auténtico, si no existe el reconocimiento a la propia naturaleza y dignidad de sus habitantes. Un sistema

que no reconoce estas condiciones sería considerado como arcaico e injusto, pues como establece el mismo autor, la legitimidad de un sistema social se valora en razón del reconocimiento y aplicación práctica de los derechos humanos. **27**

4.4.1.6. Por su parte, el ambiente es definido en la Ley Ambiental del Distrito Federal como *el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados*. **28**

4.4.1.7. Raúl Brañes refiere que el ambiente debe ser entendido como un sistema o conjunto de elementos que interactúan entre sí, con la precisión de que estas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no inherentes a los elementos aislados que constituyen el sistema. **29**

4.4.1.8. Se debe aclarar que el medio ambiente no consiste tan sólo en el espacio en que se desarrolla la vida de los seres vivos sino, en un sentido más amplio, es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de las generaciones venideras abarca además a seres humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. **30**

4.4.1.9. Como se ha mencionado, el medio ambiente se integra por elementos naturales que hacen posible la existencia del ser humano, así como su desarrollo conjuntamente con el de otros seres vivos. Por tanto, se debe reconocer en primer término, que el origen de la vida se encuentra en la naturaleza, consecuentemente la continuación de la primera de las mencionadas depende indiscutiblemente de la subsistencia y preservación de la segunda.

4.4.1.10. Una vez contemplado el contenido de los derechos humanos y el medio ambiente, se considera que el medio ambiente es un derecho humano debido a que un ambiente sano es sinónimo de derecho a la vida, es garantía para un futuro seguro para las generaciones venideras, constituye la única vía para alcanzar la dignidad y desarrollo pleno del ser, así como de subsistencia de la especie humana. La trascendencia de este derecho radica en ser un derecho continente, como indica Rufina Hernández Rodríguez, ya que es fundamento para el ejercicio de los demás derechos humanos. **31**

4.4.1.11. Lo anterior se explica, si se toma en cuenta que el derecho humano al medio ambiente es primordial para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como son: el derecho a un medio ambiente seguro y saludable, a un alto estándar de salud, al desarrollo ecológicamente sustentable, a un estándar de vida adecuado, incluyendo el acceso a alimentación y agua potable, derecho de los niños para vivir en un medio ambiente apropiado para su desarrollo físico y mental, a una participación completa y equitativa de todas las personas en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, a la planificación del desarrollo, de las decisiones políticas que afecten a la comunidad a un nivel local, nacional e internacional, a la educación e información incluyendo la relacionada

con vínculos entre salud y medio ambiente, el derecho a compartir los beneficios del progreso científico.

4.4.1.12. Demetrio Loperena afirma que el *disfrute del derecho al medio ambiente adecuado, no depende de los sistemas sociales o políticos ya que, como la vida misma, procede de la Naturaleza, no del actuar humano. Lo que sí depende del sistema social es su negación, pero esta constatación no altera la ontología de la relación hombre-medio y su consecuencia jurídica: el derecho al medio ambiente adecuado.*³² Sobre el particular, el Doctor M. Sommer señaló: *propiciar cambios de actitud y alcanzar el nivel de cultura requerido en razón de usar responsablemente espacios y recursos naturales, el distribuir colectiva y equitativamente sus beneficios, sin menoscabo de mejorar y proteger el ambiente, es la única garantía de futuro seguro de las nuevas generaciones.* ³³

4.4.1.13. Ahora bien, una vez que con anterioridad se ha mencionado la relevancia del medio ambiente y su vinculación con los derechos humanos, esta Comisión enunciará aspectos específicos en relación con las barrancas en la Ciudad de México. Sobre el particular se menciona que éstas representan elementos físicos importantes, tanto para la regulación del clima, como para la captación de aguas pluviales. ³⁴ Por ello, resulta preeminente que las autoridades generen las acciones procedentes para la preservación y aprovechamiento sustentable de las barrancas. En el caso de las barrancas, la evaluación del impacto ambiental es uno de los instrumentos preventivos de política ambiental básicos, ya que mediante éste es posible prever, evitar, mitigar y compensar los efectos adversos al ambiente o a los recursos naturales.³⁵

4.4.1.14. Hay un importante marco jurídico que regula el uso, aprovechamiento, restricciones y vigilancia de las barrancas en el Distrito Federal. Así tenemos que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la Ley Ambiental del Distrito Federal prevén definiciones y tratamientos diferentes para las barrancas a partir de su ubicación, esto es si están o no en el suelo de conservación. Por su parte, la Ley Ambiental considera a las barrancas como una depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico. En el mismo sentido se menciona el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, La ley Ambiental del Distrito Federal, el Programa General de Desarrollo Urbano en el Distrito Federal; el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal³⁶ ; los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, los Programas Parciales de desarrollo Urbano, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal de 2001, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento..

4.4.1.15. Ahora bien, la violación al derecho humano al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado se acredita a pesar de que tanto la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos como la Dirección General de Regulación y Vigilancia Ambiental ha tomado conocimiento de los actos de invasión y

construcción ilegal dentro del sistema de barrancas de esa demarcación territorial, pero primordialmente en la denominada La Diferencia, no se han generado las acciones contundentes, eficaces y adecuadas para abolir estos actos y mitigar los daños causados.

4.4.2. Consideraciones finales respecto de la importancia del derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

4.4.2.1. Compuesto de diferentes elementos tanto naturales como artificiales, el medio ambiente innegablemente es primordial para el ser humano, pues es éste el que brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. Cada uno de los elementos que componen al medio ambiente en su ámbito natural —agua, aire, suelo, temperatura, luz, etc.— son esenciales para el bienestar del hombre y para el disfrute de otros derechos fundamentales, por principio el derecho a la vida misma.

4.4.2.2. La difusión sobre la importancia de los elementos naturales en la vida del ser, debe convertirse en una tarea primordial además de cotidiana, en caso contrario la devastación del medio ambiente culminará con la desaparición de la vida tal y como la conocemos hoy en día. Por tanto, una imperiosa tarea es la protección a todos aquellos recursos que forman parte de la riqueza natural, más aún cuando éstos son generadores de servicios ambientales o forman parte del ciclo de restauración de otros elementos naturales, como sucede en el caso particular de las barrancas..

4.4.2.3. En efecto, las barrancas son formaciones geológicas donde se albergan diversas especies de flora y fauna de tipo silvestre, las cuales capturan y mitigan gases de efecto invernadero en especial el CO₂ o dióxido de carbono (evitando así el calentamiento global), conforman cauces de agua, además revisten suma importancia en el ciclo hidrológico **z**, del cual se abastece alrededor del setenta por ciento del agua que se consume en el Distrito Federal. Sin embargo y a pesar de los beneficios que proporcionan, éstas son utilizadas como tiraderos de basura, son espacios para tirar residuos sólidos a fin de que una vez llenas, se construyan edificaciones, en ellas también se descargan aguas residuales o constituyen zonas de asentamientos irregulares..

4.4.2.4. Es compromiso del Estado proteger las zonas que resultan primordiales dentro del ciclo hidrológico; significa proteger la vida y la salud, como afirma el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, en la observación general emitida el 26 de noviembre del año 2002, en la cual de igual forma se establece que *los Estados parte deben adoptar estrategias comprensivas e integradas y programas que aseguren que haya suficiente y saludable agua para las presentes y futuras generaciones.* **37**

4.4.2.5. No debe pasar por alto que el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras se encuentra en igual jerarquía que lo concerniente a objetivos fundamentales como la paz y el desarrollo económico y

social; sin duda para alcanzar tales objetivos, es necesaria la concienciación y aceptación del compromiso de participación tanto de autoridades como de toda Institución y ciudadano de esta Ciudad, en el entendido de que la realización de ese deber no puede ser ya postergado.

4.4.2.6. En virtud de lo anterior, esta Comisión en cumplimiento a la tarea de protección del derecho humano a la vida, la salud, al agua y a un medio ambiente sano, consciente de la importancia que encierra el contar con tan preciado líquido y retomando lo ya afirmado en la Recomendación 09/2003**38** , en la que se subrayó que:

“El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El Derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos...”.

“Cabe enfatizar que el Distrito Federal, como entidad en su conjunto, sufre de una creciente escasez de agua, que ha llevado a las autoridades a sobre explotar el acuífero de la Ciudad y a traer agua de cuencas hidrológicas alejadas. La sobre explotación del acuífero es del orden del 50%, es decir que **de cada 2 litros que se extraen sólo se recarga 1**. Aún así, el acuífero sigue aportando el 70% del total del agua que se consumen en la Ciudad. El 30% de déficit se cubre con el agua que se trae de fuera de la cuenca, como es el caso de Cutzamala y Lerma”.

4.4.2.7. Se considera necesario remarcar la trascendencia que conlleva el daño a zonas de importancia tal, como lo son las barrancas, en el entendido que su degradación es proporcional a la afectación a la vida, a la salud y al desarrollo tanto físico y mental del ser humano, por tanto la necesidad de expandir un conocimiento y respeto más profundo y una mayor sensibilización de la población en general hacia estos lugares a fin de lograr un equilibrio entre la satisfacción de necesidades y la preservación de la vida presente y futura.

4.4.2.8. Al ser el medio ambiente un conjunto de elementos naturales, sociales y culturales que impactan en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de las generaciones venideras, que incluye a los animales plantas, agua, suelo y aire, su cuidado y resguardo resulta ser tarea primordial para todos los que habitamos el planeta. Como derecho fundamental, el medio ambiente es un derecho inherente a todo ser humano por su propia naturaleza, sin el cual la dignidad, el desarrollo en sociedad y la vida plena son inalcanzables. El detrimento de cualquiera de los componentes que conforman el medio ambiente, acarrea sin duda el menoscabo a la salud, al desarrollo humano en cualquiera de sus aspectos: físico, mental, psicológico, científico cultural, etc. Por ello proteger el derecho humano al medio ambiente adecuado, es salvaguardar el derecho a la vida y a la dignidad del ser humano, incluyendo generaciones actuales y futuras.

4.4.2.9. Así es como todo Estado democrático, libre y auténtico lo será si existe el reconocimiento y aplicación práctica de los derechos humanos, el reconocimiento a la naturaleza y dignidad de sus habitantes; de lo contrario, se estará frente a un Estado arcaico e injusto. En tal virtud surge el derecho ambiental, como rama del

derecho que amalgama todas aquellas disposiciones tanto programáticas como jurídicas, que tienden a la preservación del medio ambiente, a través de diversos mecanismos como la prevención, la regulación de conductas tanto de personas físicas como morales, el establecimiento de responsabilidades para las autoridades así como sanciones ante hechos delictuosos. Sin embargo, dado que la preocupación por las consecuencias del daño que el ser humano ha ocasionado al medio ambiente a través de los años data de no más de tres décadas a la fecha, el conjunto de normas en materia ambiental aún sigue en proceso, con el fin de lograr el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades humanas y la preservación del ambiente, como único sendero de la preservación de la vida, la salud y la dignidad humana.

4.4.2.10. La protección ambiental requiere de un esfuerzo individual que no puede ser suplido por otras instancias. El individuo humano ha de acostumbrarse a adquirir el máximo de calidad de vida sin alterar sustancialmente los parámetros de la biosfera³⁹; sin embargo, en este proceso del cuidado del medio ambiente las autoridades tienen un mandato legal, el cual deben cumplir en toda su amplitud. Dejar a un lado estas acciones vulnera no solamente los derechos humanos de la presente generación, sino además pone en riesgo la supervivencia de las generaciones futuras y la satisfacción de sus necesidades. Por ello, esta Comisión se pronuncia ahora en favor de la vida mediante el cuidado de los elementos naturales que rodean a los habitantes de esta Ciudad. El proceso de sensibilización no es un trabajo fácil, pero juntos, con la información adecuada al alcance de todos, se podrá construir en esta Ciudad un mejor lugar para vivir.

4.4.3. Vinculación del derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado con el derecho a la vivienda

4.4.3.1. Por otra parte, detrás del fenómeno de los asentamientos irregulares como forma de acto ilegal que ocurre dentro del suelo de conservación o en las zonas de barrancas, está el factor de la carencia de una oferta de vivienda incluyente.

4.4.3.2. Es importante establecer que a nivel internacional se ha definido el derecho a la vivienda como el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a acceder y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y en dignidad.

4.4.3.3. Así tenemos que en 1991, en el Comentario General 4 del PIDESC se establecieron los elementos constitutivos que debía contener una vivienda adecuada que son: seguridad en la tenencia; disponibilidad de servicios e infraestructura; posibilidad de manutención; habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural. Años más tarde, en Nairobi, un grupo de expertos se reunió para establecer indicadores urbanos y se establecieron 5 aspectos que debían considerarse en el acceso de la vivienda adecuada, que son: acceso a agua potable, acceso al saneamiento, seguridad de la tenencia, durabilidad de la unidad habitacional y área suficiente para vivir⁴⁰.

4.4.3.4. Si bien es cierto en el Distrito Federal existen programas para el acceso a la vivienda, las invasiones, los asentamientos irregulares, las obras y actos ilegales que se realizan dentro de las barrancas, son indicadores de que el Estado no está garantizando adecuadamente el acceso a la vivienda digna y decorosa; por ello, por la vinculación tan importante que tiene el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado con el derecho a una vivienda digna y adecuada, deben ser tratados desde una perspectiva integral de los DDHH, con el objeto de que se respete, garantice y proteja en beneficio de las y los habitantes del Distrito Federal los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

5. El deber del estado de reparar el daño por violaciones a los derechos humanos

Esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal consideró que en el presente caso se acreditaron las violaciones a derechos humanos enunciadas en los puntos anteriores, por lo que es importante tomar las medidas necesarias para restituir los daños ocasionados a los agraviados en la presente Recomendación, dadas por la no actividad e ineficacia de las autoridades en el tratamiento y seguimiento de las actividades ilegales realizadas en el sistema de barrancas en Cuajimalpa de Morelos, específicamente en la barranca denominada La Diferencia, por lo que, a continuación se procede a determinar los parámetros que servirán de base para la reparación.

5.1. Sobre la competencia para solicitar reparaciones en materia de violación a los derechos humanos.

5.1.1. El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la existencia de las Comisiones de Derechos Humanos, como órganos encargados de la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, facultándolos para formular recomendaciones públicas no vinculatorias.

5.1.2. Por otra parte, el artículo 133 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los tratados internacionales que hayan sido aprobados por el Senado, son Ley Suprema de la Unión.

5.1.3. Ahora bien, la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**,⁴¹, establece que:

Artículo 1.

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

5.1.4. De la anterior disposición se desprende, *contrario sensu*, que el Estado tiene la obligación de cumplir con la reparación del daño a las víctimas por violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de sus servidores públicos, en virtud de que una de sus obligaciones es respetar y hacer respetar los derechos de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.

5.1.5. Por su parte, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, establece:

Artículo 46.

Concluida la investigación, el visitador correspondiente formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un periodo que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes.

En el proyecto de Recomendación se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

5.1.6. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la solución que da el Derecho en esta materia consiste en exigir del Estado responsable la reparación de los efectos inmediatos de los actos ilícitos, pero sólo en la medida jurídicamente tutelada. Por otra parte, en cuanto a las diversas formas y modalidades de reparación, la regla de la *integrum restitutio* se refiere a un modo como puede ser reparado el efecto de un acto violatorio de derechos humanos, pero no es la única forma como debe ser reparado, porque puede haber casos en que aquella no sea posible, suficiente o adecuada (cfr. Usine de Chorzów, fond, *supra* 43, p. 48). De esta manera, a juicio de la Corte, debe ser interpretado el artículo 63.1 de la Convención Americana⁴².

5.2. Sobre los parámetros de la reparación.

5.2.1. Uno de los principales problemas en materia ambiental es la falta de prevención en el cuidado de los elementos que constituyen el medio ambiente. La prevención debe observarse ineludiblemente ya que, a diferencia de otros aspectos, al producirse un daño al ambiente su reparación se torna compleja y muchas veces imposible. Sobre todo por que en muchas de las ocasiones, el costo económico de la recomposición no es fácilmente asequible para los responsables de éste.

5.2.2. Es así como el parámetro para establecer las medidas de reparación respecto de la violación al derecho humano a la protección judicial, se da en base a la argumentación contenida en la presente Recomendación respecto de la omisión de los servidores públicos para realizar las acciones necesarias de investigación del caso que les fue planteado. Dejando a un lado las obligaciones que les impone la Ley Ambiental del Distrito Federal, inicialmente de prevención, a través de la verificación de los procedimientos de visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de los preceptos de la Ley Ambiental del Distrito Federal, su Reglamento y del resto de normas en materia ambiental y de ordenamiento ecológico del territorio.

5.2.3. Ante la demostrada inactividad en este ámbito, imputable a las autoridades de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos es necesario establecer dos acciones en materia de reparación. El primero, en relación con la responsabilidad administrativa que en su caso, tengan los servidores públicos de la Delegación Cuajimalpa de Morelos; el segundo y más importante, el referente a generar las acciones o mecanismos legales tendientes a obtener una reparación a los daños ocasionados al medio ambiente.

5.2.3.1. Cabe señalar que en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha establecido que una de las formas de reparar el daño ocasionado, es mediante la investigación y sanción de los servidores públicos que de una u otra manera contribuyeron para que se diera la violación o que ésta continuara. Al respecto, la Corte ha establecido:

61. Respecto a la continuación del proceso para la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, esa es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad. **CORTE I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C N0. 28, párr. 53-55 y 61.**

5.2.3.2. Es así que se considera deber de la autoridad responsable el reparar los daños que hubiese ocasionado a los agraviados. Tomando en cuenta lo anterior, y por lo que hace a **la primera forma** de reparación, ésta será realizando e iniciando los procedimientos de investigación correspondientes respecto de la actuación de los servidores públicos que con sus acciones u omisiones dejaron de dar cumplimiento a las normas en materia ambiental.

5.2.3.3. El **segundo punto** que contempla la reparación, también a cargo de las autoridades de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, será el iniciar los procedimientos legalmente establecidos (de verificación) para determinar las infracciones en materia de: **a) Desarrollo Urbano, b) Construcciones, c) Remoción, derribo o retiro de árboles, y d) Residuos Sólidos.** Dichas acciones deberán contemplar, de ser así legalmente procedente, medidas de seguridad, correctivas

o de urgente aplicación, atendiendo a los aspectos de impacto ambiental que han sido afectados.

5.2.3.4. Las evidencias obtenidas son concluyentes y acreditan la violación a derechos humanos en agravio de José Lauro Godínez González y otros; por ello, procede la reparación del daño solicitada en los términos ya descritos.

6. FUNDAMENTO DE ESTA COMISIÓN PARA EMITIR LA PRESENTE RECOMENDACIÓN

Adicionalmente a la fundamentación que se encuentra indicada en el cuerpo de esta Recomendación, es de invocar los siguientes artículos 1, 2, 3, 5, 6, 17 fracción IV, 22 fracción IX, 24 fracción IV, 46, 47, 48 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como 4°, 119, 120, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal concluyó la queja conforme a los puntos de la siguiente::

R E C O M E N D A C I Ó N

Al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal.

PRIMERO: Se giren instrucciones al área que corresponda, para que, en un plazo breve, se realice una investigación preliminar para determinar el nombre, cargo y área de adscripción, de todos los servidores públicos que intervinieron en el trámite de la denuncia que el peticionario puso en conocimiento de esa autoridad en abril de 2003.

SEGUNDO. Con el resultado, se de vista al Órgano de Control Interno de dicha Jefatura Delegacional para realizar la investigación preeliminar y, en su caso, incoar el procedimiento administrativo correspondiente contra los servidores públicos conducentes.

TERCERO. Se de vista al Ministerio Público competente con lo actuado e investigado por esta Comisión, para que, en su caso, determine la responsabilidad penal en que pudieron incurrir los servidores públicos involucrados.

CUARTO. Se inicien y determinen en forma efectiva y oportuna, los procedimientos legalmente establecidos (de verificación) para determinar las infracciones en materia de: **a)** Desarrollo Urbano, **b)** Construcciones, **c)** Remoción, derribo o retiro de árboles, y **d)** Residuos Sólidos. Dichas acciones deberán contemplar, de ser así legalmente procedente, medidas de seguridad, correctivas o de urgente aplicación, atendiendo los aspectos de impacto ambiental que han sido afectados.

QUINTO. En caso de que del resultado de los procedimientos instaurados se ordene la remoción de los materiales usados en la construcción de las viviendas, la restauración de la tierra y la reforestación de la misma, se ofrezca a las y los habitantes de las mismas alternativas que garanticen su derecho a la vivienda.

SEXTO. Se giren instrucciones escritas, precisas y contundentes a los responsables de las áreas que tengan vinculación con el aspecto ambiental, a efecto de que en términos de su competencia, en todos aquellos casos que sean de su conocimiento, se observen y acaten puntualmente los ordenamientos jurídicos que son el fundamento de la presente Recomendación, y se privilegie la protección al medio ambiente.

SÉPTIMO. Se realice un recorrido a lo largo de la barranca *La Diferencia*, con la finalidad de obtener un inventario preciso sobre las obras y construcciones existentes, y se verifique que éstas hayan cumplido con el marco legal vigente para su realización. En caso de detectarse obras y construcciones ilegales, se instauren los procedimientos conducentes para que se impongan las sanciones correspondientes y se compensen los daños ecológicos ocasionados.

OCTAVO. Se programe un calendario de reuniones, para que se establezcan los mecanismos eficaces para lograr una adecuada coordinación interinstitucional y la correcta aplicación de la normatividad en materia ambiental y del ordenamiento territorial, por parte de las autoridades competentes para realizar acciones de verificación en el suelo de conservación, así como para la aplicación de medidas de seguridad y sanciones administrativas tendientes a preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

NOVENO. Se proceda a la reparación de los daños causados, en los términos descritos en los puntos Primero al Cuarto que anteceden

A la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal.

DÉCIMO. Se resuelva con toda oportunidad, eficacia y efectividad los procedimientos que se han iniciado en la Dirección General de Regulación y Vigilancia Ambiental, relacionados con el sistema de barrancas de Cuajimalpa de Morelos, pero sobre todo aquellos que estén relacionados con la colonia Lomas del Chamizal.

DÉCIMO PRIMERO. Que la resolución administrativa que se dicte, determine en forma puntual y pormenorizada la afectación ambiental generada por las obras realizadas, así como las medidas de compensación y sanciones que resulten procedentes.

DÉCIMO SEGUNDO. Se realice un foro en materia ambiental, con la inclusión de especialistas en el área y con participación ciudadana, tendiente a la difusión sobre la relación e importancia que guarda el sistema de barrancas con el medio ambiente en la Ciudad de México, su vinculación con el derecho humano a un

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a fin de que se adopten medidas educativas, de prevención y corrección, incluyendo acciones concretas para sancionar actividades ilícitas en ellas y las autoridades responsables de realizar dichas acciones.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 142 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se le hace saber a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y Delegación Cuajimalpa de Morelos, que disponen de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se les notifique esta Recomendación, para responder si la aceptan o no, en el entendido que de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública y deberán estar a lo previsto por los artículos 22 fracción XV y 65 bis fracción I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En caso de que se acepte la misma, se les notifica que dispondrán de un plazo de 10 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponían para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento, las cuales deberán ser remitidas a la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones, que con fundamento en los artículos 144 y 145 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es el área responsable de calificar las recomendaciones de acuerdo a su aceptación y cumplimiento.

Así lo determina y firma:

MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

c.c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Jefe del Gobierno del Distrito Federal.
ADG/MMRS/HTL.

Notas al pie de página:

1.- http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n5.htm

2.- <http://www.iepala.es/DDHH/ddhh1562.htm>

3.- http://enciclopedia.us.es/index.php/Medio_ambiente

4.- En los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho humano al medio ambiente sano está reconocido genéricamente a través del derecho a la vida. Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Artículo 6.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 4.1. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Artículo 2.1. del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Artículo 2 de la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales (Parlamento Europeo, Resolución de 16 de mayo de 1998).

5.- El derecho humano a un medio ambiente sano, también está reconocido a través del derecho a la salud. Artículo 25.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 11 de la Carta Social Europea. Artículo 15, apartado 1 de la Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales, aprobada por el Parlamento Europeo (Resolución de 16 de mayo de 1989). Artículo 19, párrafo 1 de la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (Aprobada mediante resolución de 22 de noviembre de 1989 por el Parlamento Europeo. Aprobada el 9 de diciembre de 1989).

6.- Artículo 11.1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho a la vivienda adecuada. Folleto Informativo 21. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos ONU.

7.- Principios 10 y 18 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

8.- Párrafo 13 del preámbulo del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica y Principios 22 y 23 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

9.- Principios 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; párrafos 20 y 21 del preámbulo del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica y, párrafo 4 del Preámbulo del Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

10.- Párrafo 22 del preámbulo del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica y principios 24,25 y 26 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

11.- Demetrio Loperena Rota. *Los derechos al Medio Ambiente adecuado y a su protección.*

12.- Abogado y Profesor de la Universidad de Costa Rica. Director de la Escuela Judicial del Poder Judicial. www.ambientico.una.ac.cr.

13.- Reunión en Estocolmo 5 al 16 de junio de 1972.

14.- Página electrónica www.lablaa.org/ayudadetareas/biologia/biolo171.htm

15.- <http://www.cedha.org.ar/docs/doc91-spa.doc>

16.- Corte Internacional de Justicia, Affaire relative au project Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Eslovaquie), Arret du 25 de septembre 1997, pág. 14.

17.- Sobre indigencia y acceso a la justicia ver en este mismo artículo pág. 17.

18.- Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

19.- Aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2200 (XXI) el 16 de diciembre de 1966. Aprobado por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificado por México el 24 de marzo de 1981.

20.- Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969. Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por México el 24 de marzo de 1981.

21.- *Caso Castillo Páez.* Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C. No. 34 párrs. 82 y 83. Reiterado en los casos *Suárez Rosero* (Fondo), párr. 65 (1997). *Blake* (Fondo), párr. 102 (1998); *Comunidad Mayagna* (Fondo) párr. 112 (2001), e *Ivcher Bronstein* (Fondo), párr. 135 (2001).

22.- Art. 39. Corresponde a los titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial: **LXI.** Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente desde su demarcación territorial, de conformidad con la normatividad ambiental; **LXII.** Autorizar los informes preventivos, así como conocer y gestionar las manifestaciones de impacto ambiental que en relación a construcciones y establecimientos soliciten los particulares, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; y **LXIII.** Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental; así como aplicar las sanciones que

correspondan cuando se trate de actividades o establecimientos cuya vigilancia no corresponda a las dependencias centrales, de conformidad con la normatividad ambiental aplicable.

23.- *Caso del Tribunal Constitucional*, párr. 90; *Caso Bámaca Velásquez*, párr. 191; y *Caso Cesti Hurtado*. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 125

24.- *Caso Ivcher Bronstein*, párr. 136; *Caso Cantoral Benavides*. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 164; y *Caso Durand y Ugarte*, párr. 102.

25.- *Gaceta Oficial del Distrito Federal*. 10 de febrero de 2004.

26.- *La Defensa Jurídica de la Constitución*. Ed. Duero S.A de C.V. México 1994. p. 385.

27.- Loperena Rota, Demetrio, *Los derechos al Medio Ambiente adecuado y a su protección*, En la Revista Electrónica de Derecho Ambiental, *Medio Ambiente & Derecho*. Número 3, noviembre 1999, <http://www.cica.es/aliens/gimadus/index.html>

28.- Publicada en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal* el 13 de enero del 2000. Artículo 5°.

29.- Brañes Ballesteros, Raúl, *Derecho Ambiental Mexicano*, Ed. Universo Veintiuno, México 1977, p. 25-26.

30.- *Introducción al concepto de Medio Ambiente*. www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/ms

31.- *El Derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental. Su protección jurídico penal*. Fiscal y Presidenta del Buró Provincial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en la Provincia Habana.

32.- Loperena Rota, Demetrio. *Los derechos al Medio Ambiente adecuado y a su protección*.

33.- *M. Sommer, Op.Cit.*

34.- Regulación de Barrancas y Acciones por Obras o Actividades Ilícitas (Versión preliminar en revisión). Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Abril 2004.

35. *Ibíd.* Párr. 5.

36.- Publicado en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal* el 31 de diciembre de 2003.

37.- Organización de Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 29ª. Sesión, Ginebra del 11 al 29 de noviembre de 2002. Observación General No. 15. pp.8

38.- Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Recomendación 09/2003. Caso: Violación al Derecho Humano al Agua en conexidad con los derechos humanos a la vida, salud y un medio ambiente sano. *Descripción de la situación jurídica generada por la violación a los derechos humanos y del contexto en el que los hechos se presentaron.*

39.- Demetrio Loperena Rota. *El derecho al medio ambiente adecuado.* Editorial Civitas, S.A. 1996.

40.- ONU-HABITAT,

<http://www.unhabitat.org/programmes/guo/documents/EGMfinalreport4ec02.pdf>.

41.- Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969. Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por México el 24 de marzo de 1981.

42.- Corte I.D.H., *Caso Aloeboetoe* y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 49.